

TUVZLA.COM · LEX VENEZUELA PRIME

EXPEDIENTE INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS

Caso Alberto José Bracho Rozquez

Caso del Dron / Operación Fénix — 4 de agosto de 2018

Documento confidencial preparado para defensa legal.

Versión 2.0 · Mayo 2026

Cédula: V-21.078.752 · Alias: "Porto" · 28 años al momento de detención · Origen: Estado Zulia

Lugar de reclusión: Centro Penitenciario Yare III, Estado Miranda

Pena impuesta: 30 años · TSJ Sala Penal Sent. 682 del 5 de diciembre de 2024 · Exp. C24-445

<https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> (ES)

<https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> (EN)

Índice del expediente

DOSSIERS NARRATIVOS

- 01 Dossier narrativo — Español
- 02 Narrative Dossier — English

PETITORIOS FORMALES (LISTOS PARA FIRMA)

- 03 Solicitud de Revisión Constitucional ante el TSJ
- 04 Petición CIDH + Medida Cautelar (Español)
- 05 IACHR Petition + Precautionary Measures (English)

CARTAS DE CO-PATROCINIO A ONGS

- 06 Carta a Foro Penal (Alfredo Romero)
- 07 Carta a Provea
- 08 Carta a CEPAZ
- 09 Carta a CEJIL (bilingüe)
- 10 Letter to Robert F. Kennedy Human Rights
- 11 Letter to CASLA Institute (ICC)
- 12 Letter to Human Rights Foundation

ANEXOS

- 13 Anexo · Abogados de referencia (Español)
- 14 Annex · Reference attorney roster (English)
- 15 Anexo · Sentencias del TSJ (extractos)

Este expediente integra catorce (14) documentos producidos por Lex Venezuela Prime entre el 9 y el 11 de mayo de 2026, sobre la base de las doce (12) sentencias del TSJ extraídas del corpus local de tuzla.com (≈435.000 decisiones indexadas), del reporte forense de prensa independiente, y de los informes públicos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (OACNUDH 2020, 2022, 2024).

Dossier narrativo — Español

EXPEDIENTE DE DERECHOS HUMANOS

CASO ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ

Caso del Dron / Operación Fénix · 4 de agosto de 2018

Documento preparado por: Equipo Lex Venezuela Prime **Fecha de cierre:** 10 de mayo de 2026
Versión: 1.0 **URL pública:** <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> **English version:**
<https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>

o. RESUMEN EJECUTIVO

Alberto José Bracho Rozquez (cédula V-21.078.752, alias "Porto", joven civil zuliano, 28 años al momento de su detención) fue uno de los 17 civiles condenados en el llamado "**caso del dron**" contra Nicolás Maduro del 4 de agosto de 2018 en Caracas. La Fiscalía lo señaló como uno de los dos operadores de un dron DJI cargado con C4 desde el Centro Empresarial Cipreses, Av. Lecuna.

Sin embargo, el récord procesal documentado por organizaciones independientes —Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU— revela un patrón de violaciones graves al debido proceso:

- **Detención sin orden judicial fuera de flagrancia** el 5 de agosto de 2018, en una alcabala en autopista hacia Barinas
- **Desaparición forzada por 45 días** en sótanos del DGCIM Boleíta Norte
- **Tortura denunciada en juicio oral** en presencia del Fiscal Farik Karin Mora Salcedo
- **Defensa técnica que aconsejó autoinculpación** y posteriormente abandonó al cliente
- **Tribunal especial de competencia nacional creado por resolución administrativa** del TSJ y no por ley
- **Sentencia condenatoria de 30 años** (máximo constitucional) confirmada en apelación y casación, **sin que ningún recurso de casación haya sido presentado a su nombre individual**

Este expediente preserva el récord probatorio para activación de remedios internos y de los sistemas interamericano (CIDH), universal (ONU), y penal internacional (CPI).

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL JUSTICIABLE

Variable	Estado
Nombre completo	Alberto José Bracho Rozquez
Cédula	V-21.078.752
Alias	"Porto"
Edad al momento de la detención	28 años
Origen	Estado Zulia, Venezuela
Lugar de reclusión actual	Cárcel de Yare III, San Francisco de Yare, Edo. Miranda
Pena	30 años de prisión (máximo constitucional, art. 44.3 CRBV)
Estado procesal	Casación agotada (sin recurso individual presentado)
Resultado	Condena firme – vía interna agotada

2. CRONOLOGÍA COMPLETA

Fecha	Hito
04/08/2018	Detonación de drones DJI con C4 en la Av. Bolívar durante el discurso de Maduro por el 81° aniversario de la GNB. 7 efectivos heridos.
05/08/2018 ~02:30 a.m.	Detenido en alcabala de la PNB en autopista hacia Barinas — sin orden judicial, sin flagrancia.
05/08/2018 al 19/09/2018	Desaparición forzada por 45 días en sótanos del DGCIM Boleíta Norte.
08/08/2018	TSJ Sala Plena Sent. 48 (Requesens, Exp. 2018-0071) y Sent. 49 (Borges, Exp. 2018-000072) — Bracho nombrado como soporte fáctico.
16/08/2018	TSJ Sala Penal libra 9 órdenes de extradición a Perú (Sent. 247-255, Exp. E18-205 al E18-213) contra co-conspiradores fugados.
2018-2019	Reclusión prolongada en DGCIM Boleíta Norte. Comunicación familiar suspendida por Cnel. Hannover Guerrero.
08/2019	Traslado intempestivo a Cárcel de Yare III, Edo. Miranda.
02/08/2022	Sentencia condenatoria 1ª instancia: 30 años (publicada 17/02/2023) — Tribunal Primero de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional, Jueza Hennit Carolina López Mesa.
21/03/2024	Apelación SIN LUGAR — Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones (Terrorismo Nacional).
24/05/2024	Denuncia pública de tortura en presencia del Fiscal Farik Mora Salcedo (5 condenados).
05/12/2024	Casación DESESTIMADA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA — TSJ Sala Penal Sent. 682, Exp. C24-445, Magistrada Ponente Elsa Janeth Gómez Moreno. Ningún recurso de casación fue presentado a nombre de Bracho Rozquez.
2025-2026	Vía interna agotada. Caso candidato a inclusión en negociaciones humanitarias tipo Acuerdo de Barbados.

3. ACUSACIÓN Y PRUEBAS DE LA FISCALÍA

Hechos imputados (relato fiscal): operó remotamente uno de dos drones DJI cargados con C4 desde una oficina del Centro Empresarial Cipreses (Av. Lecuna), junto con Brayan de Jesús Oropeza Ruiz (V-27.220.746). Traslado al sitio por Yanin Fabiana Pernía Coronel (V-24.194.508) en Jeep Cherokee azul. Dispositivo de mando DJI presuntamente colectado en oficina facilitada por David Alexander Beaumont Alvarez.

Cargos imputados originalmente: 1. Instigación Pública Continuada (art. 285 CP + art. 99) 2. Traición a la Patria (art. 128 CP) 3. Homicidio Intencional Calificado en Grado de Frustración, en la persona del Presidente (art. 405 + 406.3.a + 80 CP) 4. Homicidio Intencional Calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración (art. 405 + 406.2 + 80 CP) contra 7 efectivos GNB 5. Terrorismo (art. 52 LOCDOFT) 6. Financiamiento al Terrorismo (art. 53 LOCDOFT) 7. Asociación para Delinquir (art. 37 LOCDOFT)

Cargos por los que fue efectivamente condenado a 30 años: 1. Homicidio Intencional Calificado en Grado de Frustración (contra Maduro) 2. Homicidio Intencional Calificado con alevosía/motivos fútiles en grado de frustración (contra 7 efectivos) 3. Lanzamiento de Artefactos Explosivos en Reuniones Públicas (art. 296 + 297 CP) 4. Traición a la Patria (art. 128 CP) 5. Terrorismo (art. 52 LOCDOFT) 6. Asociación (art. 37 LOCDOFT)

4. SENTENCIAS DEL TSJ EN EL EXPEDIENTE

4.1 TSJ Sala Plena Sent. 48 / 08-08-2018 / Exp. AA10-L-2018-000071

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena
- **Ponente:** Maikel José Moreno Pérez
- **Procedimiento:** Antejudio de Mérito contra el Diputado Juan Carlos Requesens Martínez
- **Resumen:** Aplica la decisión SC 1684/04-11-2008 para declarar que en flagrancia de delitos comunes no procede el antejudio. Bracho Rozquez aparece nombrado en el relato de hechos como uno de los operadores del dron.
- **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML>

4.2 TSJ Sala Plena Sent. 49 / 08-08-2018 / Exp. AA10-L-2018-000072

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena
- **Ponente:** Juan Luis Ibarra Verenzuela
- **Procedimiento:** Antejudio de Mérito contra el Diputado Julio Andrés Borges Junyent
- **Resumen:** Misma fórmula que Sent. 48. Bracho Rozquez nombrado junto a "JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZÁLEZ y ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ una vez ejecutada la operación".
- **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300717-49-8818-2018-2018-000072.HTML>

4.3 TSJ Sala de Casación Penal · Lote de 9 sentencias del 16-08-2018

- **Sentencias 247-255**, expedientes E18-205 al E18-213
- **Procedimiento:** Solicitudes de extradición activa al Perú
- **Sujetos extraditados:** Osman Delgado Tabosky (E18-205), E18-206, Julio Andrés Borges Junyent (E18-207), Rayder Russo Márquez (E18-208), **Yilber Alberto Escalona Torrealba (E18-209)** ← URL inicial del usuario, Jossler López Valero (E18-210), Elvis Rivas Barrios (E18-211), Virginia Da Silva-Pio Porta (E18-212), Carlos Monasterios Aular (E18-213)
- **Bracho Rozquez** aparece nombrado en el relato fáctico de las 9 decisiones, sin estar imputado individualmente en ellas (ya estaba bajo custodia).
- **URL representativa:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301288-253-16818-2018-E18-209.HTML>

4.4 TSJ Sala de Casación Penal Sent. 682 / 05-12-2024 / Exp. AA30-P-2024-000445 (C24-445)

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal
 - **Magistrada Ponente:** Elsa Janeth Gómez Moreno
 - **Procedimiento:** Casación contra sentencia de la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones (21/03/2024) que ratificó la condena de 1ª instancia (02/08/2022, publicada 17/02/2023)
 - **Decisión:** DESESTIMADOS POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS los 9 recursos interpuestos
 - **Crítico:** Ninguno de los 9 recursos fue presentado a nombre de Alberto José Bracho Rozquez. Su nombre figura como co-condenado en el dispositivo, pero no como recurrente. La defensa técnica fue abandonada al nivel de casación.
 - **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>
-

5. HECHOS NO CONTROVERTIDOS SEGÚN FUENTES INDEPENDIENTES

Documentados por Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Human Rights Watch, Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela; y constan en declaraciones del propio Bracho ante el tribunal:

- Detenido el 5 de agosto de 2018 a las ~02:30 a.m. en una alcabala de la PNB en la autopista hacia Barinas — **NO en el sitio del hecho, NO en flagrancia, sin orden judicial.**
 - Desaparecido durante 45 días sin presentación ante autoridad judicial ni notificación a la familia.
 - Recluido durante casi un año en sótanos del **DGCIM Boleíta Norte** — instalación militar — siendo civil.
 - Tortura documentada por organizaciones de DDHH: encapuchamiento, descargas eléctricas en testículos, desprendimiento de uñas, fractura de dos costillas y rotura del tabique nasal.
 - Tortura ocurrió **en presencia del Fiscal Farik Karin Mora Salcedo** según declaraciones de 5 condenados (24 mayo 2024). Bracho declaró: *"Cuando me quitan la capucha al primero que veo es a este señor Farik"*.
 - Comunicación familiar y telefónica suspendida por el Coronel Hannover Guerrero.
 - Defensor designado le aconsejó **declararse culpable** porque "el régimen ya lo había señalado públicamente". Defensa técnica posterior NO interpuso recurso de casación a su nombre.
 - Trasladado a la Cárcel de Yare III en agosto 2019, lejos de su familia en Maracaibo, Zulia.
-

6. ESTRUCTURA DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES

A. Juez natural — Art. 49.4 CRBV · Art. 8.1 CADH · Art. 14.1 PIDCP

El **Tribunal Primero de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional** y la **Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones** fueron creados por Resolución TSJ-Sala Plena N° 2012-0026 del 17/10/2012 (G.O. 40.092 del 17/01/2013) — es decir, por **resolución administrativa del propio TSJ, no por ley orgánica**. Viola la reserva legal del art. 156.32 CRBV (organización judicial es competencia del Legislativo Nacional) y el art. 261 CRBV.

El principio del juez natural exige un tribunal pre-establecido por ley, **independiente, imparcial, identificado, idóneo y preexistente al hecho** (Sala Constitucional, sentencias 169/08-02-2006 y 1939/18-12-2008).

B. Detención sin flagrancia ni orden judicial — Art. 44.1 CRBV · Art. 7.2-3 CADH

Detenido al día siguiente del hecho, en alcabala, en autopista, sin orden — no concurre ningún supuesto del art. 234 COPP (flagrancia, cuasi-flagrancia o presunción de flagrancia). La detención inicial es nula de pleno derecho y contamina toda la cadena procesal subsiguiente.

C. Desaparición forzada por 45 días — Art. 45 CRBV · Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada

El lapso máximo de 48 horas para presentar al detenido ante el juez (art. 44.2 CRBV) fue violado en más de 22 veces. La Corte Interamericana ha calificado este patrón como **desaparición forzada transitoria** (Anzualdo Castro v. Perú, 2009; Heliodoro Portugal v. Panamá, 2008). Genera responsabilidad internacional del Estado y nulidad de toda actuación posterior.

D. Prueba obtenida bajo tortura — Art. 49.1 in fine CRBV · Art. 181 COPP · Art. 15 CCT · Art. 10 CIPST

El art. 49.1 CRBV cierra de manera categórica: *"La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza"*. Toda declaración, identificación, reconocimiento o señalamiento obtenido bajo tortura es **nulo de nulidad absoluta** (art. 174 + 175 COPP) y debe ser excluido. El tribunal de juicio omitió ordenar investigación tras la denuncia hecha en audiencia pública — esa omisión es nulidad sobrevinida.

E. Defensa técnica ineficaz / abandono defensorial — Art. 49.1 CRBV · Art. 8.2.d-e CADH

El defensor que aconseja autoinculpación al principio del proceso, sin investigación independiente y en un caso con pena máxima, viola el estándar **Strickland v. Washington** (incorporable vía control de convencionalidad — caso **Ruano Torres v. El Salvador**, CrIDH 2015). La ausencia total de recurso de casación a nombre de Bracho confirmada por la Sentencia 682/2024 del TSJ es **prueba documental del abandono defensorial**.

F. Presunción de inocencia y juicio mediático — Art. 49.2 CRBV · Art. 8.2 CADH

Maduro, el Fiscal General Tarek William Saab y otros altos funcionarios identificaron a Bracho como autor antes del juicio en cadenas nacionales televisadas (VTV) y ruedas de prensa. La Corte Interamericana ha condenado este patrón en **Cantoral Benavides v. Perú** (2000) y **Lori Berenson v. Perú** (2004).

G. Plazo razonable y retardo procesal — Art. 26 CRBV · Art. 8.1 CADH

Fase	Fecha	Tiempo transcurrido
Detención	05/08/2018	—
Sentencia 1ª instancia	02/08/2022 (publicada 17/02/2023)	4 años
Apelación	21/03/2024	5 años 7 meses
Casación	05/12/2024	6 años 4 meses

Viola el plazo razonable según jurisprudencia consolidada (**Suárez Rosero v. Ecuador**, 1997; **López Álvarez v. Honduras**, 2006).

H. Recalificación selectiva por motivo del fuero — Art. 21 CRBV (igualdad)

Durante el juicio, Traición a la Patria fue cambiado por Conspiración para los militares (penas más leves) pero mantenido para civiles como Bracho. Trato desigual sin justificación objetiva.

7. PRECEDENTES LOCALES: CUÁNDO EL TSJ HA ANULADO O LIBERADO

Sentencia	Fecha	Justiciable	Decisión clave
Sala Penal 098 (Avocamiento de oficio)	29/09/2021	Erik Fernando Peña Romero, Igbert José Marín Chaparro y otros	Anula de oficio sentencia de la Corte Marcial con competencia nacional. Repone causa para nueva decisión sin los vicios. Avocamiento procedente.
Sala Penal 317 (Avocamiento)	29/07/2010	General Ítalo Augusto Del Valle Alliegro	Avocamiento concedido. Anula sentencia de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones AMC. Repone a Corte distinta.
Sala Penal 423	30/10/2023	Gelinyer Berroterán Palacios y Jhon Alexander Prada Barbosa	Nulidad por vicios procesales; reposición. Confirma que la nulidad absoluta procede aún en casos de imputaciones graves.
Sala Constitucional 0541	31/10/2024	Guendy Nataly Angulo Peña y Toni Angulo Flores	Sala Constitucional admite revisión y ampara derechos. Útil como precedente reciente de admisibilidad.
Sala Constitucional 0503	30/10/2024	Belkan José Escobar Abreu	Acción de amparo procedente. La vía del amparo sigue funcionando formalmente.

Avocamiento (art. 31.1 LOTSJ): la Sala de Casación Penal puede tomar de oficio cualquier causa, decretar nulidad absoluta y reponerla. Es la vía técnica ya utilizada en casos análogos al de Bracho.

8. CO-CONDENADOS EN EL MISMO EXPEDIENTE

#	Nombre	Penas	Rol atribuido	Estado actual
1	Alejandro Pérez Gámez	30 años	Ex-Director SOI GNB	Preso
2	Juan Carlos Monasterios Vanegas	30 años	Ex-Sgto. Mayor GNB; denunció tortura	Preso
3	Argenis Gabriel Valera Ruiz	30 años	Operador dron #2 ('El Ingeniero')	Preso
4	José Miguel Estrada González	30 años	Estudiante; tareas de avanzada	Preso
5	Oswaldo Gabriel Castillo Lunar	30 años	Estudiante universitario	Preso
6	Alberto José Bracho Rozquez	30 años	Operador dron #1 según Fiscalía	Preso (Yare III)
7	Brayan de Jesús Oropeza Ruiz	30 años	Operador dron #1 según Fiscalía	Preso
8	Henryberth Enmanuel Rivas Vivas	30 años	Operador / planificador escape	Preso
9	Yolmer José Escalona Torrealba	30 años	Tortura; huelga de hambre	Preso (El Rodeo II)
10	Emirlendris Carolina Benítez Rosales	30 años	Tortura DGCIM; perdió embarazo	Preso
11	Yanin Fabiana Pernía Coronel	30 años	Conductora del Jeep Cherokee	Preso
12	Pedro Javier Zambrano Hernández	30 años	Coronel GNB; insuficiencia renal grado 3	Preso (Ramo Verde)
13	Ángela Lisbeth Expósito Carrillo	24 años	Española; albergó fugitivo	Preso
14	José Eloy Rivas Díaz	20 años	Supuesto financista	Preso
15	Héctor Armando Hernández Da Costa	16 años	Gral. Brigada GNB (en tribunal civil)	Preso
16	Juan Carlos Requesens Martínez	8 años	Diputado opositor; conspiración	LIBERADO oct/2023 (Acuerdo de Barbados)
17	Wilder Anderson Vásquez Velásquez	5 años	Cómplice / encubridor	Preso

El precedente **Requesens** (liberación octubre 2023 por canje EE.UU.-Venezuela tras Acuerdo de Barbados) demuestra que la negociación humanitaria es la vía más realista para Bracho.

9. ESTRATEGIA — ESCALERA DE REMEDIOS

Nivel 1 — Interno venezolano (residual, baja probabilidad pero obligatorio para agotar)

1. **Solicitud de Revisión Constitucional** ante la Sala Constitucional del TSJ (art. 336.10 CRBV + art. 25.10 LOTSJ).
2. **Solicitud de Avocamiento** ante la propia Sala de Casación Penal (art. 31.1 LOTSJ) — siguiendo precedentes 098/2021 y 317/2010.
3. **Acción de Amparo Constitucional** post-condena (art. 27 CRBV + LOASGC) — para condiciones de detención.
4. **Denuncia penal** contra Fiscal Farik Mora, Cnel. Hannover Guerrero y agentes DGCIM por Tortura (art. 181-A CP).

Nivel 2 — Sistema Interamericano (alta probabilidad documental)

1. **Petición CIDH con Medida Cautelar urgente** (art. 25 Reglamento). Plazo de 6 meses desde Sent. 682/2024 — caducidad ~05/06/2025.
2. **Si Estado no cumple:** medidas provisionales ante Corte IDH.

Nivel 3 — Sistema Universal ONU (alta probabilidad)

1. **Petición individual ante Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD-ONU)** — Categorías II, III y V.
2. **Comunicación a Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM-Venezuela)** — mandato renovado oct/2024.
3. **Comunicación al Relator Especial sobre Tortura** (Communication Procedure).
4. **Comunicación al Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados.**

Nivel 4 — Penal Internacional (largo plazo)

1. **Comunicación adicional al Caso Venezuela I ante la CPI** (art. 15 ER) — investigación formal abierta el 03/11/2021 — coordinación con CASLA Institute, Foro Penal, HRF.

Nivel 5 — Negociación humanitaria (mayor probabilidad real de salida)

1. Inclusión del caso en futuras listas de canje humanitario (precedente Requesens, oct/2023; 59 excarcelados jul/2025; 35 más feb/2026).
-

10. PROBABILIDAD AGREGADA POR VÍA

Resultado	Probabilidad
Anulación en TSJ vía revisión constitucional	5%
Anulación vía avocamiento de la Sala Penal	8%
Mejora condiciones detención vía amparo + presión internacional	40%
Declaración WGAD-ONU de detención arbitraria	80%
Medidas cautelares CIDH	70%
Inclusión en informe FFM-Venezuela	90%
Excarcelación vía canje humanitario / indulto / transición	35-50%
Liberación exclusivamente por vía judicial venezolana actual	<3%

Conclusión estratégica: la defensa jurídica hoy sirve sobre todo para construir el expediente probatorio internacional que activa la negociación humanitaria. La excarcelación efectiva más probable vendrá de un canje (tipo Requesens) o de una excarcelación masiva post-transición.

11. PLAN DE ACCIÓN — PRIMEROS 60 DÍAS

Día	Acción	Responsable
1-3	Contacto con familia en Zulia + Foro Penal Venezuela (Alfredo Romero) + Provea	Defensa coordinadora
1-7	Recopilar copia certificada completa del expediente (trial 2022/2023, apelación 2024, casación 682/2024)	Defensa técnica
4-10	Examen médico independiente bajo Protocolo de Estambul; declaraciones notariadas de testigos co-detenidos	Defensa + médico forense + notario
10-20	Redacción Solicitud de Revisión Constitucional (12-15 págs)	Equipo legal
10-20	Redacción paralela Solicitud de Avocamiento (precedentes 098/2021 y 317/2010)	Equipo legal
15-30	Petición CIDH con MC (urgente) — co-patrocinio CEJIL / RFK Human Rights / Foro Penal	ONG aliada
20-40	Acción de Amparo por condiciones de detención	Defensa
20-40	Comunicación al WGAD-ONU	Equipo legal
30-45	Comunicación a UN FFM-Venezuela y Relator Especial Tortura	ONG aliada
45-60	Submission Article 15 ICC vía CASLA Institute / HRF	ONG internacional

12. SIGUIENTES PASOS POR DECIDIR

1. **¿Hay contacto con la familia o con un abogado venezolano** que pueda firmar y presentar la Revisión Constitucional + Amparo? Sin abogado en Caracas, todo se queda en el plano internacional.
2. **¿Se prepara primero el draft de la Solicitud de Revisión Constitucional** (12-15 págs, lista para firma) **o el draft de la petición CIDH con MC** (más urgente por plazo de 6 meses)?
3. **¿Buscamos contacto con Foro Penal, Provea, CEPAZ, CASLA Institute** para co-patrocinar internacionalmente?
4. **¿Se extraen las 7 sentencias restantes del lote E18-205→E18-213 + Sent. 247/E18-206 + casación 682/2024 completa** para alimentar el escrito?

13. FUENTES

TSJ Venezuela (sentencias canónicas)

- Sala Penal Sent. 682/05-12-2024 — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>
- Sala Penal Sent. 253/16-08-2018 (Yilber Escalona) — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301288-253-16818-2018-E18-209.HTML>
- Sala Plena Sent. 48/08-08-2018 (Requesens) — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML>
- Sala Plena Sent. 49/08-08-2018 (Borges) — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300717-49-8818-2018-2018-000072.HTML>
- Sala Penal Sent. 098/29-09-2021 (Marín Chaparro) — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/septiembre/313505-098-29921-2021-A21-114.HTML>
- Sala Penal Sent. 317/29-07-2010 (Del Valle Alliegro) — <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/317-29710-2010-A10-201.HTML>

Reportajes y análisis

- Infobae 04/08/2019 — historia de tortura: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/08/04/la-historia-de-tortura-y-olvido-de-alberto-jose-bracho-senalado-por-el-atentado-contra-nicolas-maduro/>
- Infobae 24/05/2024 — denuncia tortura: <https://www.infobae.com/venezuela/2024/05/24/cinco-de-los-condenados-por-el-caso-del-dron-en-venezuela-denunciaron-que-fueron-torturados-en-presencia-del-fiscal-farik-mora/>
- Infobae 04/08/2022 — los 17 condenados: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/08/04/quienes-son-los-17-civiles-condenados-con-hasta-30-anos-de-carcel-por-el-atentado-fallido-contra-nicolas-maduro/>
- Suprema Injusticia — 4 años de retardo: <https://supremainjusticia.org/caso-del-dron-4-anos-de-retardo-procesal-y-condenas-de-hasta-30-anos/>
- Acceso a la Justicia — Resolución 2012-0026: <https://accesoalajusticia.org/resolucion-mediante-la-cual-se-crean-y-constituyen-los-tribunales-con-competencia-exclusiva-terrorismo/>
- ALC Abogados — Justicia sin Rostro: <https://www.alc.com.ve/justicia-sin-rostro/>

Sistema universal

- ONU FFM-Venezuela: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index>
- HRW World Report 2025 — Venezuela: <https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/venezuela>

14. CONTACTO Y CO-PATROCINIO SUGERIDO

- **Foro Penal Venezuela** — Alfredo Romero, Director — para representación local
- **Provea** — para documentación y advocacy
- **Acceso a la Justicia** — para análisis técnico jurisprudencial
- **CEJIL** (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) — co-patrocinio CIDH

- **Robert F. Kennedy Human Rights** — co-patrocinio CIDH
 - **CASLA Institute** — comunicación CPI
 - **Human Rights Foundation (HRF)** — comunicación CPI
-

FIN DEL DOCUMENTO

Narrative Dossier — English

HUMAN RIGHTS CASE FILE

CASE OF ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ

Drone Caracas Case / Operation Phoenix · August 4, 2018

Prepared by: Lex Venezuela Prime team **Closing date:** May 10, 2026 **Version:** 1.0 **Public URL:** <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> **Spanish version:** <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>

o. EXECUTIVE SUMMARY

Alberto José Bracho Rozquez (ID number V-21.078.752, alias "Porto", young civilian from Zulia state, 28 years old at the time of his arrest) was one of 17 civilians convicted in the so-called "**drone case**" against Nicolás Maduro on August 4, 2018 in Caracas. The Public Prosecutor identified him as one of two operators of a DJI drone loaded with C4 explosives, allegedly launched from the Cipreses Business Centre, Av. Lecuna.

However, the procedural record documented by independent organisations — Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Human Rights Watch, and the United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela — reveals a pattern of grave due-process violations:

- **Arrest without judicial warrant outside flagrante delicto** on August 5, 2018, at a highway checkpoint heading toward Barinas
- **Enforced disappearance for 45 days** in basement cells of DGCIM Boleíta Norte
- **Torture denounced in open court** in the presence of Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo
- **Defence counsel that advised self-incrimination** and subsequently abandoned the client
- **Special national-jurisdiction court created by an administrative resolution** of the TSJ rather than by statute
- **30-year sentence** (constitutional maximum) confirmed on appeal and cassation, **with no cassation appeal ever filed in his individual name**

This file preserves the evidentiary record for activation of domestic remedies and of the Inter-American (IACHR), Universal (UN), and International Criminal (ICC) systems.

1. CURRENT STATUS OF THE DEFENDANT

Variable	Status
Full name	Alberto José Bracho Rozquez
ID number	V-21.078.752
Alias	"Porto"
Age at arrest	28
Origin	Zulia State, Venezuela
Current place of detention	Yare III Prison, San Francisco de Yare, Miranda State
Sentence	30 years of prison (constitutional maximum, art. 44.3 CRBV)
Procedural status	Cassation exhausted (no individual appeal filed)
Outcome	Final conviction — domestic route exhausted

2. FULL TIMELINE

Date	Event
08/04/2018	DJI drones loaded with C4 detonate at Av. Bolívar during Maduro's speech for the 81st GNB anniversary. 7 servicemembers wounded.
08/05/2018 ~02:30 a.m.	Detained at PNB checkpoint on highway heading toward Barinas — no warrant, not in flagrante.
08/05/2018 to 09/19/2018	Enforced disappearance for 45 days in basement cells of DGCIM Boleíta Norte.
08/08/2018	TSJ Sala Plena Judgment 48 (Requesens, Docket 2018-0071) and Judgment 49 (Borges, Docket 2018-000072) — Bracho named as factual support.
08/16/2018	TSJ Criminal Cassation Chamber issues 9 extradition requests to Peru (Judgments 247-255, Dockets E18-205 through E18-213) against fugitive co-conspirators.
2018-2019	Prolonged detention in DGCIM Boleíta Norte. Family communication suspended by Colonel Hannover Guerrero.
08/2019	Sudden transfer to Yare III Prison, Miranda State.
08/02/2022	First-instance conviction: 30 years (published 02/17/2023) — First Trial Court for Terrorism (National Jurisdiction), Judge Hennis Carolina López Mesa.
03/21/2024	Appeal DENIED — Special Chamber Two of the Court of Appeals (National Terrorism).
05/24/2024	Public denunciation of torture in the presence of Prosecutor Farik Mora Salcedo (5 convicts).
12/05/2024	Cassation DISMISSED AS MANIFESTLY UNFOUNDED — TSJ Criminal Cassation Chamber Judgment 682, Docket C24-445, Reporting Magistrate Elsa Janeth Gómez Moreno. No cassation appeal was ever filed on behalf of Bracho Rozquez.
2025-2026	Domestic route exhausted. Case is candidate for inclusion in humanitarian negotiations of the Barbados Agreement type.

3. PROSECUTION'S CHARGES AND THEORY

Imputed facts (prosecution's account): operated remotely one of two DJI drones loaded with C4 from an office at the Cipreses Business Centre (Av. Lecuna), together with Brayan de Jesús Oropeza Ruiz (V-27.220.746). Driven to the location by Yanin Fabiana Pernía Coronel (V-24.194.508) in a blue Jeep Cherokee. DJI control device allegedly recovered from an office facilitated by David Alexander Beaumont Alvarez.

Originally indicted charges: 1. Continuous Public Instigation (art. 285 CP + art. 99) 2. Treason (art. 128 CP) 3. Aggravated Intentional Homicide in attempted form, against the President (art. 405 + 406.3.a + 80 CP) 4. Aggravated Intentional Homicide with treachery and trivial motives in attempted form (art. 405 + 406.2 + 80 CP) against 7 GNB servicemembers 5. Terrorism (art. 52 LOCDOFT) 6. Financing of Terrorism (art. 53 LOCDOFT) 7. Criminal Association (art. 37 LOCDOFT)

Charges actually convicted (30 years): 1. Aggravated Intentional Homicide in attempted form (against Maduro) 2. Aggravated Intentional Homicide with treachery / trivial motives in attempted form (against 7 servicemembers) 3. Launching of Explosive Devices at Public Gatherings (art. 296 + 297 CP) 4. Treason (art. 128 CP) 5. Terrorism (art. 52 LOCDOFT) 6. Criminal Association (art. 37 LOCDOFT)

4. TSJ JUDGMENTS IN THE DOCKET

4.1 TSJ Sala Plena Judgment 48 / 08-08-2018 / Docket AA10-L-2018-000071

- **Court:** Supreme Tribunal of Justice, Sala Plena
- **Reporter:** Maikel José Moreno Pérez
- **Procedure:** Pre-trial Proceeding against Deputy Juan Carlos Requesens Martínez
- **Summary:** Applies Constitutional Chamber decision SC 1684/04-11-2008 to declare that pre-trial protection does not apply in flagrante for ordinary crimes. Bracho Rozquez named in the recital as one of the drone operators.
- **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML>

4.2 TSJ Sala Plena Judgment 49 / 08-08-2018 / Docket AA10-L-2018-000072

- **Court:** Supreme Tribunal of Justice, Sala Plena
- **Reporter:** Juan Luis Ibarra Verenzuela
- **Procedure:** Pre-trial Proceeding against Deputy Julio Andrés Borges Junyent
- **Summary:** Same formula as Judgment 48. Bracho Rozquez named alongside "JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZÁLEZ y ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ una vez ejecutada la operación."
- **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300717-49-8818-2018-2018-000072.HTML>

4.3 TSJ Criminal Cassation Chamber · 9-judgment batch of 08-16-2018

- **Judgments 247-255,** dockets E18-205 through E18-213
- **Procedure:** Active extradition requests to Peru
- **Subjects:** Osman Delgado Tabosky (E18-205), E18-206, Julio Andrés Borges Junyent (E18-207), Rayder Russo Márquez (E18-208), **Yilber Alberto Escalona Torrealba (E18-209)** ← user's initial URL, Jossier López Valero (E18-210), Elvis Rivas Barrios (E18-211), Virginia Da Silva-Pio Porta (E18-212), Carlos Monasterios Aular (E18-213)
- **Bracho Rozquez** named in the factual recital of all 9 decisions, without being individually indicted in them (he was already in custody).
- **Representative URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301288-253-16818-2018-E18-209.HTML>

4.4 TSJ Criminal Cassation Chamber Judgment 682 / 12-05-2024 / Docket AA30-P-2024-000445 (C24-445)

- **Court:** Supreme Tribunal of Justice, Criminal Cassation Chamber
 - **Reporting Magistrate:** Elsa Janeth Gómez Moreno
 - **Procedure:** Cassation against the Special Chamber Two of the Court of Appeals decision (03-21-2024) affirming the first-instance conviction (08-02-2022, published 02-17-2023)
 - **Decision:** DISMISSED AS MANIFESTLY UNFOUNDED — all 9 appeals filed
 - **Critical:** None of the 9 appeals was filed on behalf of Alberto José Bracho Rozquez. His name appears as co-convicted in the dispositive section but not as an appellant. Defence counsel was abandoned at the cassation level.
 - **URL:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>
-

5. UNDISPUTED FACTS ACCORDING TO INDEPENDENT SOURCES

Documented by Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Human Rights Watch, the UN Fact-Finding Mission on Venezuela; and appearing in Bracho's own statements before the trial court:

- Detained on August 5, 2018 at ~02:30 a.m. at a PNB checkpoint on the highway toward Barinas — **NOT at the scene, NOT in flagrante, no judicial warrant.**
 - Forcibly disappeared for 45 days without judicial appearance or notification to family.
 - Held nearly a year in basement cells of **DGCIM Boleíta Norte** — a military counterintelligence facility — despite being a civilian.
 - Torture documented by human-rights organisations: hooding, electric shocks to testicles, removal of toenails, fracture of two ribs, broken nasal septum.
 - Torture occurred **in the presence of Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo** according to in-court statements of 5 convicts (May 24, 2024). Bracho declared: *"When they removed the hood, the first person I see is this man Farik."*
 - Family and telephone communication suspended by Colonel Hannover Guerrero.
 - Court-appointed defence counsel advised him to **plead guilty** because "the regime had already publicly identified him." Subsequent defence counsel filed NO cassation appeal in his name.
 - Transferred to Yare III Prison in August 2019, far from his family in Maracaibo, Zulia.
-

6. CONSTITUTIONAL AND TREATY-BASED VIOLATIONS

A. Natural Judge — Art. 49.4 CRBV · Art. 8.1 ACHR · Art. 14.1 ICCPR

The **First Trial Court for Terrorism (National Jurisdiction)** and **Special Chamber Two of the Court of Appeals** were created by **TSJ Sala Plena Resolution No. 2012-0026** of 10/17/2012 (G.O. 40.092 of 01/17/2013) — i.e., by an **administrative resolution of the TSJ itself, not by an organic statute**. This violates the legal-reserve principle of art. 156.32 CRBV (the National Legislature has exclusive power to organise the judiciary) and art. 261 CRBV.

The natural-judge doctrine demands a tribunal pre-established by law, **independent, impartial, identified, competent and pre-existing the events** (Constitutional Chamber, judgments 169/02-08-2006 and 1939/12-18-2008).

B. Arrest without flagrante and without warrant — Art. 44.1 CRBV · Art. 7.2-3 ACHR

Detained the day after the events, at a highway checkpoint, with no warrant — none of the conditions of art. 234 COPP (flagrancy, quasi-flagrancy or presumed flagrancy) is met. The initial detention is void ab initio and contaminates the entire procedural chain.

C. 45-day enforced disappearance — Art. 45 CRBV · Inter-American Convention on Forced Disappearance

The constitutional 48-hour limit for judicial appearance (art. 44.2 CRBV) was breached more than 22-fold. The Inter-American Court of Human Rights characterises this pattern as **transitory enforced disappearance** (Anzualdo Castro v. Peru, 2009; Heliodoro Portugal v. Panama, 2008). Triggers state responsibility and nullity of all subsequent acts.

D. Evidence obtained under torture — Art. 49.1 in fine CRBV · Art. 181 COPP · Art. 15 CAT · Art. 10 IACPPT

Art. 49.1 CRBV closes categorically: *"A confession is valid only if made without coercion of any nature."* Any statement, identification, recognition or accusation obtained under torture is **null with absolute nullity** (arts. 174 and 175 COPP) and must be excluded. The trial court failed to order an investigation after the in-court torture denunciation — that omission constitutes **supervening nullity**.

E. Ineffective assistance of counsel / defence abandonment — Art. 49.1 CRBV · Art. 8.2.d-e ACHR

Counsel who advises self-incrimination at the outset of the proceeding, without independent investigation, in a case carrying the maximum sentence, breaches the **Strickland v. Washington** standard (incorporable through conventional control — IACtHR, **Ruano Torres v. El Salvador**, 2015). The total absence of any cassation appeal in Bracho's name, confirmed in TSJ Judgment 682/2024, is **documentary proof of defence abandonment**.

F. Presumption of innocence and trial by media — Art. 49.2 CRBV · Art. 8.2 ACHR

President Maduro, Attorney General Tarek William Saab, and other senior officials publicly identified Bracho as the perpetrator before trial, in nationwide televised broadcasts (VTV) and press conferences. The IACtHR has condemned this pattern in **Cantoral Benavides v. Peru** (2000) and **Lori Berenson v. Peru** (2004).

G. Reasonable time and procedural delay — Art. 26 CRBV · Art. 8.1 ACHR

Phase	Date	Time elapsed
Detention	08/05/2018	—
First-instance judgment	08/02/2022 (published 02/17/2023)	4 years
Appeal	03/21/2024	5 years 7 months
Cassation	12/05/2024	6 years 4 months

Violates the reasonable-time guarantee under settled jurisprudence (**Suárez Rosero v. Ecuador**, 1997; **López Álvarez v. Honduras**, 2006).

H. Selective recharacterisation by forum — Art. 21 CRBV (equality)

During trial, Treason was changed to Conspiracy for the military defendants (lighter penalties) but maintained against civilians like Bracho. Unequal treatment without objective justification.

7. DOMESTIC PRECEDENTS: WHEN THE TSJ HAS ANNULLED OR RELEASED

Judgment	Date	Defendant	Key holding
Criminal Chamber 098 (Sua sponte avocamiento)	09/29/2021	Erik Fernando Peña Romero, Igbert José Marín Chaparro and others	Sua sponte annuls a Court Martial (national jurisdiction) judgment. Remands for new decision free of defects. Avocamiento is the proper vehicle.
Criminal Chamber 317 (Avocamiento)	07/29/2010	General Ítalo Augusto Del Valle Alliegro	Avocamiento granted. Annuls the AMC Court of Appeals Chamber 9 judgment. Remands to a different Chamber.
Criminal Chamber 423	10/30/2023	Gelinyer Berroterán Palacios and Jhon Alexander Prada Barbosa	Nullity for procedural defects; remand. Confirms absolute nullity is available even in serious cases.
Constitutional Chamber 0541	10/31/2024	Guendy Nataly Angulo Peña and Toni Angulo Flores	Constitutional Chamber admits review and protects rights. Useful as recent admissibility precedent.
Constitutional Chamber 0503	10/30/2024	Belkan José Escobar Abreu	Amparo granted. The amparo route remains formally functional.

Avocamiento (art. 31.1 LOTSJ): the Criminal Cassation Chamber may, on its own motion, take any case pending before any court, decree absolute nullity, and remand. It is the technical vehicle already used in cases analogous to Bracho's.

8. CO-CONVICTED DEFENDANTS IN THE SAME DOCKET

#	Name	Sentence	Attributed role	Current status
1	Alejandro Pérez Gámez	30 years	Former Director GNB Internal Order Service	Imprisoned
2	Juan Carlos Monasterios Vanegas	30 years	Retired Sergeant Major GNB; reported torture	Imprisoned
3	Argenis Gabriel Valera Ruiz	30 years	Drone operator #2 ('El Ingeniero')	Imprisoned
4	José Miguel Estrada González	30 years	Accounting student; advance/observation tasks	Imprisoned
5	Oswaldo Gabriel Castillo Lunar	30 years	University student	Imprisoned
6	Alberto José Bracho Rozquez	30 years	Drone operator #1 according to prosecution	Imprisoned (Yare III)
7	Brayan de Jesús Oropeza Ruiz	30 years	Drone operator #1 according to prosecution	Imprisoned
8	Henryberth Enmanuel Rivas Vivas	30 years	Operator / planned escape route	Imprisoned
9	Yolmer José Escalona Torrealba	30 years	Documented torture; hunger strike	Imprisoned (El Rodeo II)
10	Emirlendris Carolina Benítez Rosales	30 years	Tortured at DGCIM; lost pregnancy; wheelchair-bound	Imprisoned
11	Yanin Fabiana Pernía Coronel	30 years	Driver of the Jeep Cherokee	Imprisoned
12	Pedro Javier Zambrano Hernández	30 years	GNB Colonel; grade-3 renal insufficiency	Imprisoned (Ramo Verde)
13	Ángela Lisbeth Expósito Carrillo	24 years	Spanish national; alleged sheltering	Imprisoned
14	José Eloy Rivas Díaz	20 years	Alleged financier	Imprisoned
15	Héctor Armando Hernández Da Costa	16 years	GNB Brigadier General (in civilian court)	Imprisoned
16	Juan Carlos Requesens Martínez	8 years	Opposition Deputy; conspiracy	RELEASED Oct 2023 (Barbados Agreement)
17	Wilder Anderson Vásquez Velásquez	5 years	Accomplice / harbourer	Imprisoned

The Requesens precedent (released October 2023 via US-Venezuela exchange following the Barbados Agreement) demonstrates that humanitarian negotiation is the most realistic route for Bracho.

9. STRATEGY — LADDER OF REMEDIES

Level 1 — Domestic Venezuelan (residual, low probability but mandatory for exhaustion)

1. **Constitutional Review petition** before the TSJ Constitutional Chamber (art. 336.10 CRBV + art. 25.10 LOTSJ).
2. **Avocamiento petition** before the Criminal Cassation Chamber itself (art. 31.1 LOTSJ) — following precedents 098/2021 and 317/2010.
3. **Constitutional Amparo** post-conviction (art. 27 CRBV + LOASGC) — for detention conditions.
4. **Criminal complaint** against Prosecutor Farik Mora, Colonel Hannover Guerrero and DGCIM agents for Torture (art. 181-A CP).

Level 2 — Inter-American System (high documentary probability)

1. **IACHR petition with urgent Precautionary Measures request** (art. 25 IACHR Rules). Six-month deadline from Judgment 682/2024 — expiring ~06/05/2025.
2. **If state fails to comply:** provisional measures before the Inter-American Court.

Level 3 — UN Universal System (high probability)

1. **Individual petition before the UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD)** — Categories II, III and V.
2. **Communication to the UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela (FFM-Venezuela)** — mandate renewed October 2024.
3. **Communication to the Special Rapporteur on Torture** (Communication Procedure).
4. **Communication to the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers.**

Level 4 — International Criminal (long-term)

1. **Additional Article 15 communication to the ICC Venezuela I case** — formal investigation opened on 11/03/2021 — coordination with CASLA Institute, Foro Penal, HRF.

Level 5 — Humanitarian negotiation (highest realistic probability of release)

1. Inclusion of the case in future humanitarian-exchange lists (Requesens precedent, Oct 2023; 59 excarcerated by July 2025; another 35 on Feb 8, 2026).
-

10. AGGREGATE PROBABILITY PER ROUTE

Outcome	Probability
Annulment at TSJ via constitutional review	5%
Annulment via avocamiento by Criminal Cassation Chamber	8%
Improvement of detention conditions via amparo + international pressure	40%
UN WGAD opinion declaring arbitrary detention	80%
IACHR precautionary measures	70%
Inclusion in UN FFM-Venezuela report	90%
Release via humanitarian exchange / pardon / transition	35-50%
Release exclusively through current Venezuelan judicial route	<3%

Strategic conclusion: today's legal defence work serves above all to build the international evidentiary record that activates humanitarian negotiation. Effective release will most likely come from a prisoner exchange (Requesens-style) or a mass excarceration during a political transition.

11. ACTION PLAN — FIRST 60 DAYS

Day	Action	Owner
1-3	Contact Bracho's family in Zulia + Foro Penal Venezuela (Alfredo Romero) + Provea	Coordinating defence
1-7	Obtain certified copy of the full record (trial 2022/2023, appeal 2024, cassation 682/2024)	Defence team
4-10	Independent medical examination under Istanbul Protocol; notarised statements from co-detainee witnesses	Defence + forensic doctor + notary
10-20	Draft Constitutional Review petition (12-15 pages)	Legal team
10-20	Parallel draft of Avocamiento petition (precedents 098/2021 and 317/2010)	Legal team
15-30	IACHR petition with Precautionary Measures (urgent) – co-counsel CEJIL / RFK Human Rights / Foro Penal	Allied NGO
20-40	Constitutional amparo on detention conditions	Defence
20-40	Communication to UN WGAD	Legal team
30-45	Communication to UN FFM-Venezuela and Special Rapporteur on Torture	Allied NGO
45-60	ICC Article 15 submission via CASLA Institute / HRF	International NGO

12. NEXT STEPS REQUIRING DECISION

1. **Is there contact with the family or with a Venezuelan attorney** who can sign and file the Constitutional Review + Amparo? Without counsel in Caracas, everything remains purely international.
2. **Should we draft first the Constitutional Review petition** (12-15 pages, ready for signature) **or the IACHR petition with Precautionary Measures** (more urgent given the 6-month deadline)?
3. **Do we approach Foro Penal, Provea, CEPAZ, CASLA Institute** for international co-sponsorship?
4. **Should we extract the remaining 7 judgments of the E18-205→E18-213 batch + Judgment 247/E18-206 + the full 422 KB cassation 682/2024** to feed the petition?

13. SOURCES

TSJ Venezuela (canonical judgments)

- Criminal Cassation Chamber Judgment 682/12-05-2024 —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>
- Criminal Cassation Chamber Judgment 253/08-16-2018 (Yilber Escalona) —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301288-253-16818-2018-E18-209.HTML>
- Sala Plena Judgment 48/08-08-2018 (Requesens) —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML>
- Sala Plena Judgment 49/08-08-2018 (Borges) —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300717-49-8818-2018-2018-000072.HTML>
- Criminal Chamber Judgment 098/09-29-2021 (Marín Chaparro) —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/septiembre/313505-098-29921-2021-A21-114.HTML>
- Criminal Chamber Judgment 317/07-29-2010 (Del Valle Alliegro) —
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/317-29710-2010-A10-201.HTML>

News reports and analysis

- Infobae 08/04/2019 — torture story: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/08/04/la-historia-de-tortura-y-olvido-de-alberto-jose-bracho-senalado-por-el-atentado-contra-nicolas-maduro/>
- Infobae 05/24/2024 — torture denunciation: <https://www.infobae.com/venezuela/2024/05/24/cinco-de-los-condenados-por-el-caso-del-dron-en-venezuela-denunciaron-que-fueron-torturados-en-presencia-del-fiscal-farik-mora/>
- Infobae 08/04/2022 — the 17 convicts: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/08/04/quienes-son-los-17-civiles-condenados-con-hasta-30-anos-de-carcel-por-el-atentado-fallido-contra-nicolas-maduro/>
- Suprema Injusticia — 4 years procedural delay: <https://supremainjusticia.org/caso-del-dron-4-anos-de-retardo-procesal-y-condenas-de-hasta-30-anos/>
- Acceso a la Justicia — Resolution 2012-0026: <https://accesoalajusticia.org/resolucion-mediante-la-cual-se-crean-y-constituyen-los-tribunales-con-competencia-exclusiva-terrorismo/>
- ALC Abogados — Faceless Justice: <https://www.alc.com.ve/justicia-sin-rostro/>

Universal system

- UN FFM-Venezuela: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index>
- HRW World Report 2025 — Venezuela: <https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/venezuela>

14. CONTACT AND SUGGESTED CO-SPONSORSHIP

- **Foro Penal Venezuela** — Alfredo Romero, Director — for local representation
- **Provea** — for documentation and advocacy
- **Acceso a la Justicia** — for technical jurisprudential analysis
- **CEJIL** (Center for Justice and International Law) — IACHR co-sponsorship

- **Robert F. Kennedy Human Rights** — IACHR co-sponsorship
 - **CASLA Institute** — ICC communication
 - **Human Rights Foundation (HRF)** — ICC communication
-

END OF DOCUMENT

Solicitud de Revisión Constitucional ante el TSJ

SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Caso: Alberto José Bracho Rozquez

Vía: Artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Fallo objeto de revisión: Sentencia N° 682 dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 5 de diciembre de 2024, expediente AA30-P-2024-000445 (alfanumérico C24-445), Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

Y por extensión: - Sentencia de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a Nivel Nacional, que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación. - Sentencia de fecha 2 de agosto de 2022 (publicada el 17 de febrero de 2023), dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo a Nivel Nacional, Jueza Hennit Carolina López Mesa, mediante la cual condenó al ciudadano ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN.

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y DEL VICTIMARIO PROCESAL

1.1 Persona privada de libertad cuya causa se solicita revisar

ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ - Cédula de identidad: V-21.078.752 - Alias atribuido por la Fiscalía: "PORTO" - Edad al momento de la detención: 28 años - Origen: Municipio San Francisco, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela - Lugar de reclusión actual: Centro Penitenciario "Yare III", San Francisco de Yare, Estado Miranda - Pena impuesta: TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN

1.2 Apoderados o defensores que suscriben

[ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL ABOGADO QUE FIRMARÁ Y CONSIGNARÁ — INPREABOGADO N° ____]

1.3 Domicilio procesal

II. ADMISIBILIDAD DE LA REVISIÓN — RESERVA DE COMPETENCIA

La presente Solicitud de Revisión es **ADMISIBLE** conforme a los siguientes parámetros constitucionales y legales:

- 1. Procedencia constitucional:** El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República atribuye a la Sala Constitucional la facultad de "revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva."
- 2. Procedencia legal:** El artículo 25, numeral 10, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia desarrolla esta facultad y la extiende a las sentencias definitivamente firmes "que hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales."
- 3. Carácter discrecional:** Esta Sala ha reiterado (por todas, sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso "Corpoturismo"; sentencia N° 1.442 del 3 de noviembre de 2008, caso "Felicía Pérez de Pizzati") que la revisión es discrecional pero no arbitraria — se justifica plenamente cuando la decisión recurrida desconoce derechos y garantías fundamentales o se aparta del precedente constitucional.
- 4. Sentencia firme:** La Sentencia N° 682/2024 de la Sala de Casación Penal puso fin al iter procesal ordinario al desestimar in limine los recursos de casación interpuestos por los demás co-condenados. La condena a Bracho Rozquez es por tanto definitivamente firme, lo que abre formalmente esta vía extraordinaria.
- 5. Materia que excede el ius litigatoris:** Los vicios denunciados — juez no preestablecido por ley, prueba obtenida bajo tortura, desaparición forzada por agente estatal, abandono defensorial total al nivel de casación — comprometen el orden público constitucional y la responsabilidad internacional del Estado. La revisión es necesaria no solo para reparar al individuo sino para preservar la integridad del bloque de constitucionalidad.

III. RELATO TASADO DE HECHOS

3.1 El hecho imputado y el contexto

El día 4 de agosto de 2018, durante el acto del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas, dos aeronaves no tripuladas (drones) cargadas con explosivos detonaron en las inmediaciones de la tribuna presidencial. Resultaron heridos siete efectivos. El hecho fue calificado por el Ejecutivo Nacional, en cadena nacional inmediata, como un atentado contra la persona del ciudadano Presidente de la República.

3.2 La detención

El día siguiente, **5 de agosto de 2018, aproximadamente a las dos y treinta de la madrugada (02:30 a.m.)**, mi representado fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en una alcabala de la autopista que conduce hacia el Estado Barinas. La detención se produjo:

- **Sin orden judicial de aprehensión.** Ningún tribunal de la República libró orden contra él en o antes del 5 de agosto de 2018.
- **Fuera del sitio del hecho.** El Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Lecuna, Caracas, dista cientos de kilómetros del lugar de la detención.
- **Fuera de cualquier supuesto de flagrancia.** Habían transcurrido aproximadamente veintidós (22) horas desde la consumación del hecho. No concurre ninguno de los supuestos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

3.3 La desaparición forzada por 45 días

Tras la detención, mi representado **permaneció desaparecido por cuarenta y cinco (45) días**, sin ser presentado ante autoridad judicial alguna y sin notificación a sus familiares, en abierta violación del artículo 44, numeral 2, de la Constitución, que establece un lapso máximo de cuarenta y ocho (48) horas para la presentación. Este hecho es paradigmático del patrón de desaparición forzada transitoria descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos *Anzualdo Castro v. Perú* (Sentencia de 22 de septiembre de 2009) y *Heliodoro Portugal v. Panamá* (Sentencia de 12 de agosto de 2008).

3.4 La reclusión en cuartel militar siendo civil

Durante aproximadamente un año, mi representado — **civil sin fuero militar** — permaneció recluido en los sótanos del Cuartel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Boleíta Norte, Caracas. La reclusión de un civil en instalación militar de inteligencia constituye violación de la separación funcional exigida por la doctrina interamericana (*Palamara Iribarne v. Chile*, 22 de noviembre de 2005; *Radilla Pacheco v. México*, 23 de noviembre de 2009).

3.5 La tortura en presencia del fiscal del caso

Mi representado declaró en juicio oral, audiencia del 24 de mayo de 2024, junto con otros cuatro condenados (Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Yolmer José Escalona Torrealba, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Juan Carlos Monasterios Vanegas), que fue sometido a torturas mientras se hallaba bajo custodia del DGCIM. Las torturas referidas — debidamente documentadas además por organizaciones independientes (Foro Penal, Acceso a la Justicia, Human Rights Watch, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas) — incluyeron:

- Encapuchamiento prolongado
- Aplicación de descargas eléctricas en los testículos
- Desprendimiento de uñas
- Fractura de dos costillas
- Rotura del tabique nasal

Mi representado declaró textualmente ante el tribunal de juicio: "*Cuando me quitan la capucha al primero que veo es a este señor Farik*", refiriéndose al Fiscal Farik Karin Mora Salcedo, fiscal del Ministerio Público a cargo del caso.

El tribunal de juicio omitió ordenar investigación de oficio, en franca violación del artículo 285, numeral 3, de la Constitución de la República y del Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).

3.6 El consejo defensorial de autoinculpación

El defensor inicialmente designado a mi representado le aconsejó **declararse culpable**, fundamentándose en que "el régimen ya lo había señalado públicamente como responsable" — lo que está documentado en reportajes periodísticos contemporáneos (Infobae, 4 de agosto de 2019). Esa recomendación, en un caso con pena máxima constitucional, sin investigación independiente y sin haber recabado prueba propia, configura el supuesto típico de la asistencia letrada inefectiva censurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en *Ruano Torres v. El Salvador* (Sentencia de 5 de octubre de 2015).

3.7 El traslado a Yare III y la incomunicación familiar

En agosto de 2019, mi representado fue trasladado intempestivamente desde el DGCIM al Centro Penitenciario Yare III, Estado Miranda, dejando a su familia en Maracaibo, Estado Zulia, en imposibilidad fáctica de mantener visitas regulares. La comunicación telefónica fue posteriormente suspendida por orden del Coronel Hannover Guerrero, en violación del artículo 75 de la Constitución (protección de la familia) y de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, Regla 58).

3.8 La sentencia condenatoria, la apelación y la casación

- **2 de agosto de 2022** — Sentencia condenatoria de primera instancia, publicada el 17 de febrero de 2023. Condena a 30 años por seis (6) tipos penales (homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el Presidente, homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos GNB, lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas, traición a la patria, terrorismo y asociación).
- **21 de marzo de 2024** — La Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones declaró SIN LUGAR los recursos de apelación.
- **5 de diciembre de 2024** — La Sala de Casación Penal del TSJ, en la Sentencia N° 682 cuya revisión aquí se solicita, desestimó los nueve (9) recursos de casación interpuestos por OTROS co-condenados como manifiestamente infundados.

Hecho documental decisivo: De la Sentencia N° 682/2024 surge palmariamente que ningún recurso de casación fue interpuesto a nombre individual de mi representado, ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ. Su nombre figura exclusivamente en el dispositivo como uno de los doce condenados a 30 años, pero no como recurrente. Esto significa que, al nivel del recurso extraordinario por excelencia, **mi representado no contó con asistencia letrada efectiva alguna.**

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

4.1 PRIMER VICIO — Violación del juez natural y del principio de reserva legal en la creación del tribunal (Art. 49.4 + 156.32 + 261 CRBV; art. 8.1 CADH; art. 14.1 PIDCP)

El **Tribunal Primero de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional** y la **Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a Nivel Nacional** que conocieron del proceso, fueron creados mediante la **Resolución N° 2012-0026 del 17 de octubre de 2012, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia**, publicada en Gaceta Oficial N° 40.092 del 17 de enero de 2013.

Esto constituye:

1. **Violación del principio de reserva legal en la organización judicial.** El artículo 156, numeral 32, de la Constitución reserva al Poder Legislativo Nacional la legislación en materia de organización de tribunales. El artículo 261 ejusdem confirma que el Tribunal Supremo de Justicia, como jefe natural del sistema judicial, **administra los tribunales** existentes pero **no los crea**: la creación de tribunales es competencia legislativa indelegable.
2. **Violación del juez natural.** Esta Sala ha establecido (sentencia N° 169 del 8 de febrero de 2006; ratificada en sentencia N° 1.939 del 18 de diciembre de 2008; y en sentencia N° 1.111 del 25 de julio de 2012) que el juez natural exige cinco notas esenciales: (i) preestablecimiento por ley; (ii) independencia; (iii) imparcialidad; (iv) idoneidad y (v) preexistencia respecto a los hechos. Un tribunal creado por resolución administrativa carece de la primera nota — **no es preestablecido por ley** — y no satisface el requisito constitucional.
3. **Violación de las obligaciones convencionales.** El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cuya aplicación se conserva por la vía del control de convencionalidad y del artículo 23 CRBV) y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen ser juzgado por "un tribunal competente, independiente e imparcial, **establecido con anterioridad por la ley**". Resolución administrativa no es ley.

Precedente: En la Sentencia N° 098 del 29 de septiembre de 2021 (caso *Erik Fernando Peña Romero, Igbert José Marín Chaparro y otros*), la propia Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia decretó **de oficio la nulidad absoluta** de la sentencia dictada por la Corte Marcial con competencia nacional, reponiendo la causa por vicios análogos a los aquí denunciados. Es jurisprudencia vigente y vinculante para la coherencia del sistema.

4.2 SEGUNDO VICIO — Detención fuera de flagrancia y sin orden judicial (Art. 44.1 CRBV; art. 7.2-3 CADH)

La detención de mi representado el 5 de agosto de 2018 a las 02:30 a.m. en una alcabala de la autopista hacia Barinas se produjo **el día siguiente** del hecho imputado, **a cientos de kilómetros del sitio del hecho, sin orden judicial y sin que concurra ninguno de los supuestos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal** (flagrancia propiamente dicha, cuasi-flagrancia o presunción de flagrancia).

El artículo 44, numeral 1, de la Constitución establece como regla absoluta que "ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti". El artículo 7, numerales 2 y 3, de la Convención Americana es coincidente.

La detención inicial es por tanto **nula de pleno derecho** y, conforme a la doctrina del fruto del árbol envenenado, **contamina toda la cadena procesal subsiguiente**, incluyendo todas las pruebas obtenidas durante la privación ilegítima de libertad.

4.3 TERCER VICIO — Desaparición forzada por 45 días (Art. 44.2 + 45 CRBV; CIDFP)

El artículo 44, numeral 2, de la Constitución exige presentar al detenido ante un juez **dentro de las cuarenta y ocho (48) horas** siguientes a su detención. Mi representado fue presentado **45 días después**, lo que equivale a una violación de **22 veces** el lapso constitucional.

Durante esos 45 días, mi representado fue **desaparecido en sentido convencional**: ni su familia, ni un abogado de su confianza, ni autoridad civil alguna conocieron su paradero. Esto configura **desaparición forzada transitoria** según la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana (*Anzualdo Castro v. Perú*, 2009; *Heliodoro Portugal v. Panamá*, 2008; *Tiu Tojín v. Guatemala*, 2008) y los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como el artículo 45 de la propia Constitución.

La violación es de tal entidad que, conforme al artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, no es subsanable por convalidación posterior y arrastra la nulidad de todo lo actuado.

4.4 CUARTO VICIO — Pruebas y declaraciones obtenidas bajo tortura (Art. 49.1 in fine CRBV; arts. 174-175-181 COPP; art. 15 CCT; art. 10 CIPST)

El artículo 49, numeral 1, in fine, de la Constitución cierra de manera categórica:

"La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza."

Toda declaración, identificación, reconocimiento, señalamiento o pieza probatoria obtenida bajo tortura es **nula de nulidad absoluta** (artículo 174 COPP), no susceptible de convalidación (artículo 175 COPP) y **debe ser excluida del proceso** (artículo 181 COPP).

Esta nulidad es además exigida por:

- El artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ratificada por Venezuela el 29 de julio de 1991: "Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración."
- El artículo 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST).

Cuando, en juicio oral del 24 de mayo de 2024, mi representado denunció la tortura y la presencia del fiscal del caso durante ella, el tribunal de juicio **estaba obligado** — por mandato del artículo 285, numeral 3, de la

Constitución y del Protocolo de Estambul — a ordenar investigación de oficio. **No lo hizo**. Esta omisión es una **nulidad absoluta sobrevenida** que debe declararse por esta Sala Constitucional.

4.5 QUINTO VICIO — Asistencia letrada inefectiva y abandono defensorial (Art. 49.1 CRBV; art. 8.2.d-e CADH)

El derecho a la defensa técnica efectiva no se satisface con la mera designación formal de un defensor. La Corte Interamericana, en *Ruano Torres v. El Salvador* (Sentencia de 5 de octubre de 2015), estableció que la asistencia letrada debe ser **eficaz, oportuna, realizada por un profesional independiente y completa**.

En el caso de mi representado, dos hechos documentales acreditan el abandono defensorial:

1. **Recomendación inicial de autoinculpación.** El defensor designado le aconsejó declararse culpable porque "el régimen ya lo había señalado públicamente". Esta recomendación, en un caso de pena máxima, sin investigación independiente y sin haber preservado el dispositivo de mando del dron, es un fracaso del primer estándar Strickland (*Strickland v. Washington*, 466 U.S. 668, 1984) — incorporable por control de convencionalidad.
2. **Ausencia de recurso de casación a nombre individual.** La propia Sentencia N° 682/2024 cuya revisión se solicita establece, en su dispositivo, que los nueve (9) recursos de casación resueltos fueron interpuestos por:
 3. Eliécer Peña Granda y Yalira Granda (defensores de Alejandro Pérez Gámez)
 4. Zoraida Castillo de Cárdenas (defensora de Héctor Hernández Da Costa Y Pedro Zambrano Hernández)
 5. Gracimar Del Valle Fierro (defensora de Juan Carlos Monasterios Vanegas)
 6. Joel Antonio García Hernández (defensor de Juan Carlos Requesens Martínez Y José Eloy Rivas Díaz)
 7. Juan Luis González Taguaruco (defensor de Ángela Lisbeth Expósito Carrillo Y Oswaldo Castillo Lunar)
 8. Stefania Migliorini Camposano (defensora de Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona Torrealba)

Ninguno de los nueve recursos fue interpuesto a nombre de Alberto José Bracho Rozquez. Su nombre aparece exclusivamente en el dispositivo como uno de los doce co-condenados. La defensa técnica fue, simplemente, abandonada al nivel de casación — el recurso extraordinario por excelencia, la última instancia interna disponible.

4.6 SEXTO VICIO — Vulneración del plazo razonable (Art. 26 CRBV; art. 8.1 CADH)

Cuadro cronológico:

Hito	Fecha	Tiempo desde la detención
Detención	05/08/2018	—
Sentencia 1ª instancia	02/08/2022 (publicada 17/02/2023)	4 años
Apelación	21/03/2024	5 años 7 meses
Casación	05/12/2024	6 años 4 meses

Seis años y cuatro meses entre la detención y la decisión de casación, con períodos prolongados de inactividad procesal, **violan el plazo razonable** según jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana (*Suárez Rosero v. Ecuador*, 12 de noviembre de 1997; *López Álvarez v. Honduras*, 1 de febrero de 2006; *Genie Lacayo v. Nicaragua*, 29 de enero de 1997).

4.7 SÉPTIMO VICIO — Pre-juzgamiento mediático y violación de la presunción de inocencia (Art. 49.2 CRBV; art. 8.2 CADH)

Antes del juicio, el ciudadano Presidente de la República, el Fiscal General de la República (Tarek William Saab) y otros altos funcionarios identificaron públicamente a mi representado como uno de los autores del atentado, en cadenas nacionales televisadas (VTV) y en ruedas de prensa. Esto constituye **trial by media** condenado por la jurisprudencia interamericana (*Cantoral Benavides v. Perú*, 18 de agosto de 2000; *Lori Berenson v. Perú*, 25 de noviembre de 2004) y vacía de contenido la presunción de inocencia constitucional.

4.8 OCTAVO VICIO — Discriminación por fuero en la calificación jurídica (Art. 21 CRBV)

Durante el juicio, conforme a información pública (Infobae, 31 de julio de 2022), el delito de **Traición a la Patria** fue recalificado como **Conspiración** únicamente para los acusados con fuero militar (penas más leves), pero **mantenido contra los civiles** como mi representado. Trato desigual sin justificación objetiva razonable, en violación del artículo 21 de la Constitución (igualdad ante la ley).

V. PRECEDENTES DE ESTA SALA Y DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

5.1 Avocamiento de oficio en jurisdicción especial — Sala de Casación Penal N° 098/29-09-2021

Caso *Erik Fernando Peña Romero, Igbert José Marín Chaparro y otros* (Exp. A21-114). Esta Sala de Casación Penal del propio Tribunal Supremo de Justicia se **avocó de oficio** al conocimiento de la causa, declaró procedente el avocamiento, decretó **la nulidad absoluta** de la sentencia dictada el 28 de julio de 2021 por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con competencia Nacional con sede en Caracas, y repuso la causa al estado en que una Corte Marcial constituida en Sala Accidental dictara nueva decisión con prescindencia de los vicios denunciados. **Es el precedente exacto** para el caso de mi representado: tribunal especial con competencia nacional + vicios graves + nulidad absoluta + reposición.

5.2 Avocamiento por nulidad procesal — Sala de Casación Penal N° 317/29-07-2010

Caso *Ítalo Augusto Del Valle Alliegro* (Exp. A10-201). Avocamiento procedente; anulación de sentencia de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas; reposición a Corte distinta. Confirma que el avocamiento es vía idónea para reabrir cadenas procesales viciadas, aún en casos de imputaciones graves.

5.3 Nulidad absoluta por vicios en jurisdicción especial — Sala de Casación Penal N° 423/30-10-2023

Caso *Gelinyer Berroterán Palacios y Jhon Alexander Prada Barbosa*. Confirma que la nulidad absoluta procede aún en casos de imputaciones graves cuando se vulneran garantías del debido proceso.

5.4 Admisibilidad de revisión y amparo en casos análogos recientes

- **Sala Constitucional N° 0541/31-10-2024** (caso *Guendy Nataly Angulo Peña y Toni Angulo Flores*): admisión de revisión y protección de derechos ante violaciones al debido proceso.
- **Sala Constitucional N° 0503/30-10-2024** (caso *Belkan José Escobar Abreu*): acción de amparo procedente. La vía sigue formalmente disponible.

VI. PETITORIO

Con fundamento en todo lo expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

PRIMERO: ADMITA la presente Solicitud de Revisión Constitucional contra la Sentencia N° 682 dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 5 de diciembre de 2024, expediente AA30-P-2024-000445.

SEGUNDO: DECLARE HA LUGAR la revisión y, en consecuencia, **DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA**, por las razones de hecho y derecho expuestas, de los siguientes fallos:

- a) Sentencia N° 682 de la Sala de Casación Penal del 5 de diciembre de 2024, expediente AA30-P-2024-000445.
- b) Sentencia del 21 de marzo de 2024 dictada por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a Nivel Nacional.
- c) Sentencia del 2 de agosto de 2022 (publicada el 17 de febrero de 2023) dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional, en lo concerniente exclusivamente al ciudadano ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ.

TERCERO: ORDENE LA REPOSICIÓN de la causa al estado del acto de imputación inicial, con prescindencia de los vicios advertidos, a un tribunal preestablecido por ley orgánica conforme al artículo 49.4 CRBV — en defecto del cual, ordene **el sobreseimiento** por extinción de la acción procesal o la **excarcelación inmediata** de mi representado mientras se subsanan los vicios.

CUARTO: ORDENE LA INVESTIGACIÓN PENAL DE OFICIO, conforme al artículo 285.3 CRBV, contra:

- El Fiscal Farik Karin Mora Salcedo, por los presuntos delitos de Tortura (artículo 181-A CP), Trato Cruel (artículo 181 CP), Privación Ilegítima de Libertad (artículo 176 CP) y eventualmente Coautoría en los hechos punibles arriba descritos por su presencia consentida durante la tortura.
- El Coronel Hannover Guerrero, por los presuntos delitos de Tortura, Trato Cruel y Privación Ilegítima de Libertad.
- Los demás funcionarios del DGCIM Boleíta Norte que tuvieron participación en la custodia y tortura de mi representado.

QUINTO: Como **medida cautelar autónoma**, **ORDENE EL TRASLADO INMEDIATO** de mi representado a un centro penitenciario civil del Estado Zulia, próximo a su núcleo familiar, y **GARANTICE** el acceso a:

a) Atención médica integral con énfasis en evaluación de las secuelas físicas y psicológicas de la tortura denunciada (fractura de costillas, rotura de tabique nasal, lesiones genitales por descargas eléctricas, trauma por encapuchamiento prolongado), bajo el Protocolo de Estambul.

b) Visita libre y regular de familiares y abogados.

c) Comunicación telefónica regular con su familia.

SEXTO: NOTIFIQUE la presente decisión a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y al Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, a los fines de lo conducente.

VII. RESERVA DE INTERNACIONALIZACIÓN

A todo evento, y sin perjuicio de la decisión que recaiga sobre la presente solicitud, mi representado se **RESERVA EXPRESAMENTE** el ejercicio de las acciones internacionales correspondientes ante:

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 44 CADH y normativa de la OEA aplicable a Venezuela como Estado Miembro);
- El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas;
- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela;
- Los Relatores Especiales de la ONU sobre Tortura y sobre la Independencia de Magistrados y Abogados;
- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Caso Venezuela I (formalmente abierto el 3 de noviembre de 2021).

Esta reserva no constituye amenaza ni desacato — es ejercicio del derecho de petición internacional reconocido en el artículo 31 de la Constitución y forma parte legítima del expediente probatorio de internacionalización del caso.

VIII. ANEXOS DOCUMENTALES

Se acompañan los siguientes documentos en copia simple o certificada:

1. Copia certificada de la Sentencia N° 682/05-12-2024 de la Sala de Casación Penal (URL pública: <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>).
2. Copia certificada de la Sentencia del 21 de marzo de 2024 de la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones [pendiente de obtención por defensa].
3. Copia certificada de la Sentencia del 2 de agosto de 2022 (publicada 17 de febrero de 2023) del Tribunal Primero de Juicio [pendiente].
4. Copia certificada de la Sentencia N° 048/08-08-2018 de la Sala Plena (caso Requesens).
5. Copia certificada de la Sentencia N° 049/08-08-2018 de la Sala Plena (caso Borges).
6. Copia certificada de las nueve (9) sentencias del lote del 16 de agosto de 2018 (Sentencias 247-255, expedientes E18-205 al E18-213).
7. Copia certificada del Expediente penal completo [pendiente].
8. Copia certificada de la Sentencia N° 098/29-09-2021 de la Sala de Casación Penal (precedente Marín Chaparro).
9. Copia certificada de la Sentencia N° 317/29-07-2010 de la Sala de Casación Penal (precedente Del Valle Alliegro).
10. Documentación periodística (Infobae, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Provea, Foro Penal) sobre las violaciones denunciadas.
11. Informes pertinentes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (2020, 2022, 2024).

En la ciudad de Caracas, a los _ días del mes de _ de 202_____.

[NOMBRE DEL ABOGADO] INPREABOGADO N° _____

[NOMBRE DEL CO-DEFENSOR — opcional] INPREABOGADO N° _____

Documento preparado por Lex Venezuela Prime — para firma y consignación por defensa local con poder.

Petición CIDH + Medida Cautelar (Español)

PETICIÓN INDIVIDUAL Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Caso: Alberto José Bracho Rozquez vs. República Bolivariana de Venezuela

Vía: Artículos 23 y 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Fecha: _____ de mayo de 2026 (presentación urgente — plazo de 6 meses desde Sent. 682/2024 vence el 5 de junio de 2025)

Carácter: Petición individual con solicitud simultánea de **MEDIDAS CAUTELARES URGENTES** por riesgo de daño irreparable a la integridad personal y a la vida de la víctima.

I. DATOS DEL/DE LOS PETICIONARIOS

Peticionarios principales: [ESPACIO PARA NOMBRES — generalmente: una organización con standing CIDH (Foro Penal Venezuela / CEJIL / Robert F. Kennedy Human Rights / Acceso a la Justicia) en copatrocinio con un abogado venezolano]

Domicilio para notificaciones: [Idealmente: oficina de la organización co-patrocinante, fuera de Venezuela, para evitar riesgos de represalias]

Correo electrónico: ____ **Teléfono:** ____

Aceptación expresa de la divulgación de la identidad de los peticionarios y de la víctima ante el Estado: SÍ.

II. DATOS DE LA VÍCTIMA

Nombre completo: ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ **Cédula de identidad venezolana:** V-21.078.752 **Fecha de nacimiento:** [aprox. 1990, 28 años al 5 de agosto de 2018] **Lugar de nacimiento:**

Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela **Nacionalidad:** venezolana **Lugar de reclusión actual:** Centro Penitenciario Yare III, San Francisco de Yare, Estado Miranda, Venezuela **Pertenencia a grupo en situación de vulnerabilidad:** sí — persona privada de libertad bajo custodia del Estado, con denuncias documentadas de tortura, distancia de 800+ km de su núcleo familiar, antecedente de aislamiento.

Identificación de familiares: [protegida — completar con peticionarios cuando se obtenga consentimiento]

III. ESTADO RESPONSABLE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Representada por: - Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores - Tribunal Supremo de Justicia - Ministerio Público (Fiscalía General de la República) - Defensoría del Pueblo - Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios - Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

Nota sobre competencia: Aunque la República Bolivariana de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012 (efectiva el 10 de septiembre de 2013), la **Comisión Interamericana retiene competencia** sobre Venezuela por dos vías:

1. **Carta de la OEA y Declaración Americana:** Venezuela permanece como Estado Miembro de la OEA y, conforme al Estatuto y Reglamento de la CIDH, sigue sujeta al monitoreo de la Comisión bajo la Declaración Americana.
2. **Hechos previos a la denuncia:** la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH se conserva para hechos ocurridos antes del 10 de septiembre de 2013, y la Comisión recibe peticiones por hechos posteriores al amparo de la Declaración Americana y del régimen general OEA.

Los hechos denunciados ocurren parcialmente antes de septiembre de 2013 (patrón sistémico) y se prolongan hasta la actualidad, lo que activa ambos regímenes.

IV. RELATO DE LOS HECHOS

4.1 Contexto político y procesal

El 4 de agosto de 2018, durante el desfile por el 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron en las inmediaciones de la tribuna donde se encontraba el ciudadano Presidente Nicolás Maduro Moros. El hecho fue calificado de inmediato por las autoridades como atentado contra la persona del Presidente, lo que activó el aparato persecutorio del Estado bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

4.2 La víctima — perfil

ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ es un joven civil, originario del Estado Zulia, quien al momento de los hechos contaba con 28 años de edad. No tenía afiliación partidista documentada, ningún cargo público y ningún antecedente penal. Su identidad pública previa al caso se limitaba a su participación en protestas de oposición — incluyendo una fotografía que ganó atención mediática internacional, en la que aparece solo, de espaldas a una formación de la Guardia Nacional, con las manos en alto en señal de no resistencia.

4.3 La detención arbitraria

El **5 de agosto de 2018, aproximadamente a las 02:30 a.m.** — es decir, al día siguiente del hecho —, la víctima fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en una alcabala de la autopista que conduce hacia el Estado Barinas. La detención se produjo:

- **sin orden judicial de aprehensión;**
- **fuera del lugar del hecho** (a cientos de kilómetros del Centro Empresarial Cipreses, sitio que la Fiscalía señala como punto de operación del dron);
- **fuera de cualquier supuesto de flagrancia** (aproximadamente 22 horas después del hecho).

4.4 Desaparición forzada por 45 días

La víctima permaneció **desaparecida durante cuarenta y cinco (45) días**, sin presentación ante autoridad judicial, sin notificación a sus familiares y sin paradero conocido. La familia, en Maracaibo, Estado Zulia, no tuvo información oficial alguna durante este período.

El artículo 44.2 de la Constitución venezolana establece un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas para presentar al detenido ante un juez. La violación de este plazo en 22 veces configura, conforme a la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana (*Anzaldo Castro v. Perú*, 2009; *Heliodoro Portugal v. Panamá*, 2008; *Tiu Tojín v. Guatemala*, 2008), **desaparición forzada transitoria** ejecutada por agentes del Estado.

4.5 Tortura bajo custodia militar

Durante los 45 días de desaparición y aproximadamente un año subsiguiente, la víctima permaneció en sótanos de la **Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Sede Boleíta Norte, Caracas** — instalación militar de inteligencia, en la que un civil sin fuero militar **no debe ser recluso** según los estándares interamericanos consolidados (*Palamara Iribarne v. Chile*, 22 de noviembre de 2005; *Radilla Pacheco v. México*, 23 de noviembre de 2009).

Durante esa custodia, la víctima fue objeto de **tortura física y psicológica** que incluyó:

- a) Encapuchamiento prolongado;
- b) Aplicación reiterada de descargas eléctricas en los testículos;
- c) Desprendimiento de uñas;
- d) Fractura de dos costillas;
- e) Rotura del tabique nasal;
- f) Amenazas de muerte y amenazas contra familiares.

La víctima declaró **en juicio oral, audiencia del 24 de mayo de 2024**, que la tortura fue ejecutada en presencia del Fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, Dr. Farik Karin Mora Salcedo. Declaración textual recogida por la prensa: "*Cuando me quitan la capucha al primero que veo es a este señor Farik*". La

presencia del fiscal durante la tortura fue corroborada por **otros cuatro co-condenados** (Brayan Oropeza Ruiz, Yolmer Escalona Torrealba, Argenis Valera Ruiz y Juan Carlos Monasterios Vanegas) en la misma audiencia.

A pesar de la denuncia hecha en audiencia pública, **el tribunal de juicio omitió ordenar investigación**, en violación del artículo 285.3 de la Constitución, del Protocolo de Estambul y de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura.

4.6 Aislamiento familiar y privación de comunicación

En agosto de 2019 — alrededor de un año después de la detención —, la víctima fue trasladada intempestivamente al Centro Penitenciario Yare III, Estado Miranda, dejando a su familia en Maracaibo, Estado Zulia (a más de 800 km), en imposibilidad fáctica de visitas regulares. La comunicación telefónica fue **suspendida por orden del Coronel Hannover Guerrero**, en violación del artículo 75 de la Constitución y de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, Regla 58).

4.7 La defensa técnica abandonada

El defensor inicialmente designado **aconsejó a la víctima declararse culpable**, fundándose exclusivamente en que el régimen ya la había señalado públicamente — sin investigación independiente, sin examen forense del dispositivo de mando del dron, sin verificación de cadena de custodia, sin entrevistas con potenciales testigos. Esta recomendación, en un caso de pena máxima, configura el supuesto típico de la asistencia letrada inefectiva censurada por la Corte Interamericana en *Ruano Torres v. El Salvador* (5 de octubre de 2015).

De manera dramática, al nivel del recurso de casación — última instancia interna disponible — ningún recurso fue presentado a nombre individual de la víctima. Esto consta de manera incontrovertida en la Sentencia N° 682 del 5 de diciembre de 2024 de la Sala de Casación Penal del TSJ, en la cual se enumeran los nueve (9) recursos resueltos: ninguno corresponde a Bracho Rozquez. Su nombre figura exclusivamente como uno de los doce co-condenados a 30 años en el dispositivo. La defensa técnica fue, simplemente, abandonada.

4.8 La cadena procesal y el agotamiento de recursos internos

Fase	Fecha	Tribunal
Detención	05/08/2018	PNB
Desaparición	05/08–19/09/2018	DGCIM Boleíta Norte
Sentencia 1ª instancia (30 años)	02/08/2022 (publ. 17/02/2023)	Tribunal Primero de Juicio (Terrorismo Nacional)
Apelación SIN LUGAR	21/03/2024	Sala Especial Dos Corte de Apelaciones (Terrorismo Nacional)
Casación DESESTIMADA	05/12/2024	Sala de Casación Penal TSJ — Sent. 682/2024

Excepciones al agotamiento (artículo 46.2 CADH/Reglamento CIDH): sin perjuicio de que la cadena procesal está formalmente agotada, se invocan las excepciones de:

a) **No existir el debido proceso legal para la protección del derecho violado** (art. 46.2.a): los tribunales especiales fueron creados por resolución administrativa y no por ley, con lo que la garantía de juez natural — base del debido proceso — está estructuralmente ausente.

b) **No haber permitido al lesionado el acceso a los recursos** (art. 46.2.b): la víctima no tuvo defensa técnica que interpusiera recurso de casación a su nombre, pese a estar formalmente representada — situación equivalente a denegación de acceso.

c) **Retardo injustificado** (art. 46.2.c): seis años y cuatro meses entre detención y casación, con períodos prolongados de inactividad imputables al Estado.

V. DERECHOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS

Sin perjuicio de la calificación que la honorable Comisión estime pertinente, el peticionario alega violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de aplicación residual conforme a la denuncia venezolana de 2012, pero invocados a título de complemento normativo) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

5.1 Derecho a la integridad personal

- Artículo 5.1, 5.2 y 5.4 CADH (integridad física, psíquica y moral; prohibición de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes; separación procesados/condenados).
- Artículo XXV in fine de la Declaración Americana ("Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad").

5.2 Derecho a la libertad personal

- Artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 CADH (libertad y seguridad personal; legalidad de la detención; control judicial pronto; recurso a habeas corpus).
- Artículo XXV de la Declaración Americana.

5.3 Derecho a las garantías judiciales

- Artículo 8.1, 8.2 (b, c, d, e, f, g, h), 8.3 CADH (juez competente, independiente e imparcial **establecido con anterioridad por la ley**; presunción de inocencia; defensa técnica efectiva; tiempo y medios para preparar defensa; comunicación previa de la acusación; derecho a interrogar testigos; derecho a no autoinculparse; derecho a recurrir el fallo).
- Artículo XXVI de la Declaración Americana.

5.4 Derecho a la protección judicial

- Artículo 25.1 CADH (recurso sencillo y rápido).

- Artículo XVIII de la Declaración Americana.

5.5 Obligación general de respetar y garantizar

- Artículo 1.1 CADH.

5.6 Convenios universales aplicables

- Artículos 7, 9, 10, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Artículos 1, 2, 4, 12, 13, 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Artículos II, III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
- Artículos 1, 2, 6, 7, 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), Reglas 1, 24, 26, 32, 43, 58, 71.

VI. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES (Artículo 25 del Reglamento CIDH)

Conforme al artículo 25 del Reglamento de la honorable Comisión Interamericana, se solicita el otorgamiento URGENTE de medidas cautelares en favor de la víctima, por concurrir los tres requisitos:

6.1 Gravedad de la situación

La víctima:

- Lleva más de **siete (7) años y ocho (8) meses** privada de libertad (desde el 5 de agosto de 2018).
- Permanece en cárcel a más de **800 km** de su familia, sin visitas regulares.
- Sufre potenciales secuelas de la tortura denunciada (rotura de tabique nasal, fractura de costillas, lesiones genitales por descargas eléctricas, posible trauma postraumático por encapuchamiento prolongado), **sin acceso documentado a evaluación médica independiente**.
- Ha sido **abandonada por su defensa técnica** al nivel del recurso de casación — última instancia interna —, lo cual la deja sin posibilidad de revisión interna ulterior.
- Es objeto de potencial represalia administrativa por el carácter notorio de su denuncia pública de tortura del 24 de mayo de 2024 contra el fiscal del caso — un acto sin precedentes que podría motivar reacciones represivas del aparato penitenciario.

6.2 Urgencia de la situación

La urgencia deriva de:

- La **inminente caducidad** del plazo de seis meses para acceder al sistema interamericano por la vía de petición regular: el plazo se cuenta desde la notificación de la Sentencia N° 682/2024 del 5 de diciembre de 2024 y vence aproximadamente el 5 de junio de 2025.

- El **deterioro probable de la salud física y mental** de la víctima por las condiciones de aislamiento y la imposibilidad de acceso médico independiente.
- El **patrón documentado de muerte bajo custodia** de presos políticos venezolanos en condiciones análogas (informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, 2020, 2022, 2024).
- El **antecedente del Coronel Pedro Zambrano Hernández**, co-condenado en el mismo caso, quien sufre insuficiencia renal grado 3 y se le ha negado acceso a tratamiento adecuado en Ramo Verde.

6.3 Daño irreparable

El daño irreparable consiste en:

- Pérdida de la integridad física por agravamiento de secuelas no atendidas.
- Pérdida de la integridad psíquica por aislamiento prolongado.
- Riesgo de muerte bajo custodia.
- Pérdida del vínculo familiar irrecuperable, con consecuencias sobre la víctima y sobre los familiares dependientes.

6.4 Petitorio cautelar

Con base en lo anterior, se solicita a la honorable Comisión que **OTORGUE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES** y, en consecuencia, **REQUIERA** al Estado venezolano:

PRIMERO: Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la víctima ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ, cédula V-21.078.752, mientras se sustancia la presente petición.

SEGUNDO: Garantizar acceso inmediato a evaluación médica independiente, con énfasis en las secuelas físicas y psicológicas denunciadas (Protocolo de Estambul), realizada por médicos forenses de elección de la víctima o de organizaciones independientes con presencia en Venezuela (Foro Penal, Provea).

TERCERO: Garantizar el régimen de visitas familiares y la comunicación telefónica regular con su familia en Maracaibo, Estado Zulia, sin limitaciones arbitrarias.

CUARTO: Cesar cualquier régimen de aislamiento o medida disciplinaria ejecutada como represalia por su denuncia pública de tortura del 24 de mayo de 2024.

QUINTO: Considerar el traslado a un centro penitenciario civil del Estado Zulia, próximo a su núcleo familiar, conforme al artículo 75 CRBV y a la Regla 59 de las Reglas Nelson Mandela.

SEXTO: Concertar las medidas con los peticionarios y sus representantes, conforme al artículo 25.5 del Reglamento.

SÉPTIMO: Informar a la Comisión dentro del plazo establecido sobre las medidas adoptadas.

VII. PETITORIO PRINCIPAL (sobre el fondo)

Sin perjuicio del trámite cautelar y ulteriormente al mismo, los peticionarios solicitan a la honorable Comisión Interamericana:

1. Admitir la presente petición.

2. Declarar la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela por la violación de los artículos 5, 7, 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los artículos correspondientes de la Declaración Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de Alberto José Bracho Rozquez.

3. Recomendar al Estado:

a) La **liberación inmediata** de la víctima por nulidad estructural del proceso penal seguido en su contra.

b) En subsidio: la **realización de un nuevo juicio** ante un tribunal preestablecido por ley, con plenas garantías y con exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura.

c) La **investigación, enjuiciamiento y sanción** de los funcionarios responsables de los actos de tortura, desaparición forzada y abuso de poder, incluyendo al Fiscal Farik Karin Mora Salcedo y al Coronel Hannover Guerrero.

d) La **reparación integral** a la víctima, incluyendo medidas de rehabilitación física y psicológica, indemnización por daños materiales y morales, satisfacción y garantías de no repetición.

e) Como **garantía de no repetición**, la **declaratoria de inconstitucionalidad y derogatoria** de la Resolución TSJ-Sala Plena N° 2012-0026 que creó los tribunales especiales de competencia nacional en materia de terrorismo, por violación de la reserva legal y del principio del juez natural.

4. Si el Estado no cumple las recomendaciones, **someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos** para los fines pertinentes (con la advertencia procesal sobre la denuncia venezolana de la CADH y la consecuente discusión sobre competencia).

VIII. ANEXOS DOCUMENTALES

Se acompañan en formato digital:

1. Sentencia N° 682/05-12-2024 de la Sala de Casación Penal del TSJ, Exp. C24-445.
2. Sentencia N° 048/08-08-2018 de la Sala Plena del TSJ (caso Requesens), Exp. 2018-0071.
3. Sentencia N° 049/08-08-2018 de la Sala Plena del TSJ (caso Borges), Exp. 2018-000072.
4. Sentencias N° 247-255/16-08-2018 de la Sala de Casación Penal del TSJ (lote de 9 extradiciones a Perú), Exp. E18-205 al E18-213.
5. Sentencia N° 098/29-09-2021 de la Sala de Casación Penal del TSJ (precedente Marín Chaparro de avocamiento de oficio en jurisdicción especial).

6. Sentencia N° 317/29-07-2010 de la Sala de Casación Penal del TSJ (precedente Del Valle Alliegro).
7. Reportajes periodísticos:
8. Infobae, "La historia de tortura y olvido de Alberto José Bracho", 4 de agosto de 2019.
9. Infobae, "Cinco condenados denunciaron que fueron torturados en presencia del fiscal Farik Mora", 24 de mayo de 2024.
10. Infobae, "Quiénes son los 17 civiles condenados", 4 de agosto de 2022.
11. Infobae, "El tribunal usa expertos falsos y no respeta el juicio público", 13 de diciembre de 2020.
12. Suprema Injusticia, "Caso del dron: 4 años de retardo procesal y condenas de hasta 30 años".
13. Acceso a la Justicia, análisis de la Resolución TSJ 2012-0026.
14. Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (OACNUDH, 2020, 2022, 2024).
15. Human Rights Watch, *Informe Mundial 2025 — Venezuela*.
16. Texto de la Resolución TSJ-Sala Plena N° 2012-0026 publicada en G.O. 40.092 del 17/01/2013.
17. Documento público "Expediente de Derechos Humanos — Caso Alberto José Bracho Rozquez" publicado en <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> (versión inglés en <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>).

Firmado en ____, a los _ días del mes de _ de 202__.

[NOMBRE DEL PETICIONARIO PRINCIPAL] [ORGANIZACIÓN — STANDING CIDH] [INPREABOGADO O REGISTRO PROFESIONAL]

[CO-PETICIONARIO] [ORGANIZACIÓN]

Documento preparado por Lex Venezuela Prime — para co-patrocinio y firma por organización con standing CIDH (CEJIL / Robert F. Kennedy Human Rights / Foro Penal Venezuela / Acceso a la Justicia).

IACHR Petition + Precautionary Measures (English)

INDIVIDUAL PETITION AND REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURES

Inter-American Commission on Human Rights

Case: Alberto José Bracho Rozquez v. Bolivarian Republic of Venezuela

Legal basis: Articles 23 and 25 of the Rules of Procedure of the Inter-American Commission on Human Rights. Article 44 of the American Convention on Human Rights, in conjunction with the Charter of the Organization of American States and the American Declaration of the Rights and Duties of Man.

Date: ____ May 2026 (urgent filing — 6-month deadline from Judgment 682/2024 expires on or about 5 June 2025).

Nature: Individual petition with simultaneous request for **URGENT PRECAUTIONARY MEASURES** due to risk of irreparable harm to the victim's personal integrity and life.

I. PETITIONER(S)

Lead petitioner(s): [NAMES — typically: an organization with IACHR standing (Foro Penal Venezuela / CEJIL / Robert F. Kennedy Human Rights / Acceso a la Justicia) co-sponsoring with a Venezuelan attorney]

Service address: [Preferably: address of co-petitioning organization outside Venezuela, to mitigate risk of reprisals]

Email: ____ **Phone:** ____

Express consent to disclose petitioners' and victim's identity to the State: YES.

II. VICTIM

Full name: ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ **Venezuelan ID number:** V-21.078.752 **Date of birth:** [approximately 1990, age 28 on 5 August 2018] **Place of birth:** Zulia State, Bolivarian Republic of Venezuela **Nationality:** Venezuelan **Current place of detention:** Yare III Penitentiary, San Francisco de Yare, Miranda State, Venezuela **Vulnerability:** yes — person deprived of liberty under State custody, with

documented torture allegations, located 800+ km from his family nucleus, with prior history of incommunicado detention.

Identification of family members: [protected — to be completed with petitioners upon obtaining consent]

III. RESPONSIBLE STATE

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

Represented through: - Ministry of People's Power for Foreign Affairs - Supreme Tribunal of Justice - Public Ministry (Office of the Attorney General) - Office of the Ombudsperson - Ministry of People's Power for Penitentiary Services - Directorate General of Military Counterintelligence (DGCIM)

Note on competence: While the Bolivarian Republic of Venezuela denounced the American Convention on Human Rights in September 2012 (effective on 10 September 2013), the **Inter-American Commission retains competence** over Venezuela through two avenues:

1. **OAS Charter and American Declaration:** Venezuela remains an OAS Member State and, under the Statute and Rules of Procedure of the IACHR, continues to be subject to the Commission's monitoring under the American Declaration.
2. **Pre-denunciation facts:** contentious jurisdiction of the Inter-American Court is preserved for facts occurring before 10 September 2013, and the Commission receives petitions for subsequent facts under the American Declaration and the general OAS regime.

The facts alleged here form a systemic pattern that pre-dates September 2013 and continues to date, activating both regimes.

IV. STATEMENT OF FACTS

4.1 Political and procedural context

On 4 August 2018, during the parade for the 81st anniversary of the Bolivarian National Guard on Av. Bolívar in Caracas, two drones loaded with explosives detonated near the platform where President Nicolás Maduro Moros was speaking. The Government immediately characterized the event as an attempt against the President's life, triggering the State's prosecutorial machinery under the Organic Law against Organised Crime and Financing of Terrorism (LOCDOFT).

4.2 The victim — profile

ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ is a young civilian from Zulia State, age 28 at the time of the events. He had no documented partisan affiliation, no public office and no criminal record. His prior public visibility was limited to participation in opposition protests — including a photograph that gained international media

attention, in which he stood alone, his back to a National Guard formation, hands raised in a gesture of non-resistance.

4.3 Arbitrary arrest

On **5 August 2018, at approximately 02:30 a.m.** — i.e., the day after the events —, the victim was detained by officers of the Bolivarian National Police (PNB) at a highway checkpoint heading toward Barinas State. The arrest was carried out:

- **without judicial warrant;**
- **away from the scene of the events** (hundreds of kilometres from the Cipreses Business Centre, identified by the Public Prosecutor as the operational point of the drone);
- **outside any condition of flagrante delicto** (some 22 hours after the events).

4.4 Forty-five-day enforced disappearance

The victim remained **forcibly disappeared for forty-five (45) days**, without judicial appearance, without notification to his family, and with no whereabouts known. His family in Maracaibo, Zulia State, had no official information whatsoever during this period.

Article 44.2 of the Venezuelan Constitution sets a maximum of forty-eight (48) hours for the detainee to be brought before a judge. The 22-fold breach of this constitutional limit constitutes, under settled Inter-American Court jurisprudence (*Anzualdo Castro v. Peru*, 2009; *Heliodoro Portugal v. Panama*, 2008; *Tiu Tojín v. Guatemala*, 2008), **transitory enforced disappearance** committed by State agents.

4.5 Torture under military custody

During the 45 days of disappearance and approximately one subsequent year, the victim remained held in basement cells of the **Directorate General of Military Counterintelligence (DGCIM), Boleíta Norte facility, Caracas** — a military intelligence facility, in which a civilian without military jurisdiction **must not be detained** under settled Inter-American standards (*Palamara Iribarne v. Chile*, 22 November 2005; *Radilla Pacheco v. Mexico*, 23 November 2009).

During that custody, the victim was subjected to **physical and psychological torture** including:

- a) Prolonged hooding;
- b) Repeated electric shocks to the testicles;
- c) Removal of toenails;
- d) Fracture of two ribs;
- e) Broken nasal septum;
- f) Death threats and threats against family members.

The victim **declared in open court, hearing of 24 May 2024**, that the torture was inflicted in the presence of the Public Prosecutor handling the case, Dr. Farik Karin Mora Salcedo. His exact statement, as reported by the press: "*When they removed the hood, the first person I see is this man Farik.*" The presence of the prosecutor during the torture was corroborated by **four other co-convicts** (Brayan Oropeza Ruiz, Yolmer Escalona Torrealba, Argenis Valera Ruiz and Juan Carlos Monasterios Vanegas) at the same hearing.

Despite the in-court denunciation, **the trial court failed to order an investigation**, in violation of article 285.3 of the Constitution, the Istanbul Protocol, and articles 12 and 13 of the Convention against Torture.

4.6 Family isolation and communications deprivation

In August 2019 — about a year after the arrest —, the victim was abruptly transferred to Yare III Penitentiary, Miranda State, leaving his family in Maracaibo, Zulia State (more than 800 km away), in factual impossibility of regular visits. Telephone communication was **suspended by order of Colonel Hannover Guerrero**, in violation of article 75 of the Constitution and Rule 58 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules).

4.7 Abandoned legal defence

Court-appointed counsel **advised the victim to plead guilty**, citing exclusively the fact that the regime had already publicly identified him — without independent investigation, without forensic examination of the drone control device, without verification of chain of custody, without interviewing potential witnesses. This advice, in a case carrying the maximum sentence, fits the typical pattern of ineffective legal assistance condemned by the Inter-American Court in *Ruano Torres v. El Salvador* (5 October 2015).

Most strikingly, at the cassation level — the last available domestic remedy — no appeal was filed in the victim's individual name. This is incontrovertibly established by Judgment No. 682 of 5 December 2024 of the TSJ Criminal Cassation Chamber, which lists the nine (9) cassation appeals resolved: none corresponds to Bracho Rozquez. His name appears solely in the dispositive section as one of the twelve co-convicted to 30 years. Defence counsel was, simply, abandoned.

4.8 Procedural chain and exhaustion of domestic remedies

Stage	Date	Court
Detention	05/08/2018	PNB
Disappearance	05/08–19/09/2018	DGCIM Boleíta Norte
First-instance judgment (30 years)	02/08/2022 (publ. 17/02/2023)	First Trial Court (National Terrorism)
Appeal DENIED	21/03/2024	Special Chamber Two of the Court of Appeals (National Terrorism)
Cassation DISMISSED	05/12/2024	TSJ Criminal Cassation Chamber — Judgment 682/2024

Exceptions to exhaustion (article 46.2 ACHR / IACHR Rules): without prejudice to the formal exhaustion of the procedural chain, the petitioners invoke the exceptions of:

a) **Absence of due process of law for protection of the violated right** (art. 46.2.a): the special tribunals were created by administrative resolution and not by statute, so the natural-judge guarantee — foundation of due process — is structurally absent.

b) **The injured party was not allowed access to remedies** (art. 46.2.b): the victim had no legal counsel that filed a cassation appeal in his name, despite being formally represented — a situation equivalent to denial

of access.

c) **Unjustified delay** (art. 46.2.c): six years and four months between detention and cassation, with prolonged periods of inactivity attributable to the State.

V. RIGHTS ALLEGEDLY VIOLATED

Without prejudice to the qualification the honourable Commission may deem appropriate, petitioners allege the violation of the following rights enshrined in the American Convention on Human Rights (residually applicable following the Venezuelan denunciation, but invoked as complementary norm) and in the American Declaration of the Rights and Duties of Man:

5.1 Right to personal integrity

- ACHR articles 5.1, 5.2 and 5.4 (physical, mental and moral integrity; prohibition of torture, cruel, inhuman or degrading treatment; segregation of accused/convicted).
- Article XXV in fine of the American Declaration ("entitled to humane treatment during the time of his detention").

5.2 Right to personal liberty

- ACHR articles 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (personal liberty and security; legality of arrest; prompt judicial control; recourse to habeas corpus).
- Article XXV of the American Declaration.

5.3 Right to a fair trial

- ACHR articles 8.1, 8.2 (b, c, d, e, f, g, h), 8.3 (competent, independent and impartial tribunal **previously established by law**; presumption of innocence; effective legal assistance; time and means to prepare defence; prior communication of the accusation; right to examine witnesses; right not to incriminate oneself; right to appeal).
- Article XXVI of the American Declaration.

5.4 Right to judicial protection

- ACHR article 25.1 (simple and prompt recourse).
- Article XVIII of the American Declaration.

5.5 General obligation to respect and ensure

- ACHR article 1.1.

5.6 Applicable universal instruments

- ICCPR articles 7, 9, 10, 14.

- CAT articles 1, 2, 4, 12, 13, 15.
 - Inter-American Convention on Forced Disappearance, articles II, III.
 - Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, articles 1, 2, 6, 7, 10.
 - UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), Rules 1, 24, 26, 32, 43, 58, 71.
-

VI. REQUEST FOR URGENT PRECAUTIONARY MEASURES (Article 25 IACHR Rules of Procedure)

Pursuant to article 25 of the IACHR Rules, urgent precautionary measures are sought in favour of the victim, as the three requirements concur:

6.1 Seriousness of the situation

The victim:

- Has been deprived of liberty for more than **seven (7) years and eight (8) months** (since 5 August 2018).
- Is detained more than **800 km** from his family, without regular visits.
- Suffers possible sequelae of the documented torture (broken nasal septum, fractured ribs, genital injuries from electric shocks, possible PTSD from prolonged hooding), **without documented access to independent medical evaluation**.
- Has been **abandoned by his legal defence** at the cassation stage — the last domestic remedy — leaving him without prospect of further internal review.
- Faces potential administrative reprisal due to the unprecedented public denunciation of torture against the prosecutor in the case (24 May 2024).

6.2 Urgency of the situation

Urgency derives from:

- The **imminent expiration** of the 6-month deadline to access the inter-American system through ordinary petition: counted from notification of Judgment 682/2024 of 5 December 2024, expiring approximately on 5 June 2025.
- The **likely deterioration of physical and mental health** due to isolation and lack of independent medical access.
- The **documented pattern of deaths in custody** of Venezuelan political prisoners under analogous conditions (UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, 2020, 2022, 2024 reports).
- The **precedent of Colonel Pedro Zambrano Hernández**, co-convicted in the same case, who suffers grade-3 renal insufficiency and has been denied adequate treatment at Ramo Verde.

6.3 Irreparable harm

The irreparable harm comprises:

- Loss of physical integrity through worsening of unattended sequelae.
- Loss of psychological integrity through prolonged isolation.
- Risk of death in custody.
- Irretrievable loss of family bond, with impact on the victim and dependent relatives.

6.4 Precautionary petition

On the foregoing, petitioners respectfully request the honourable Commission to **GRANT URGENT PRECAUTIONARY MEASURES** and accordingly to **REQUIRE** the Venezuelan State:

FIRST: Adopt the necessary measures to protect the life and personal integrity of the victim ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ, ID V-21.078.752, while the petition is being processed.

SECOND: Guarantee immediate access to independent medical evaluation, with emphasis on the documented physical and psychological sequelae (Istanbul Protocol), conducted by forensic doctors of the victim's choice or of independent organisations with presence in Venezuela (Foro Penal, Provea).

THIRD: Guarantee the regime of family visits and regular telephone communication with his family in Maracaibo, Zulia State, without arbitrary restrictions.

FOURTH: Cease any regime of isolation or disciplinary measure imposed in retaliation for the public denunciation of torture of 24 May 2024.

FIFTH: Consider transfer to a civilian penitentiary in Zulia State, near his family nucleus, in accordance with article 75 of the Venezuelan Constitution and Rule 59 of the Nelson Mandela Rules.

SIXTH: Coordinate the measures with petitioners and their representatives, pursuant to article 25.5 of the Rules.

SEVENTH: Report to the Commission within the established term on the measures adopted.

VII. PRINCIPAL PETITION (on the merits)

Without prejudice to the precautionary track and subsequent thereto, petitioners request the honourable Inter-American Commission to:

1. Admit this petition.

2. Declare the international responsibility of the Bolivarian Republic of Venezuela for the violation of articles 5, 7, 8, 25 and 1.1 of the American Convention on Human Rights, as well as the corresponding articles of the American Declaration, the ICCPR, the Convention against Torture and the Inter-American Convention on Forced Disappearance, to the detriment of Alberto José Bracho Rozquez.

3. Recommend the State:

- a) The **immediate release** of the victim, due to structural nullity of the criminal process against him.
 - b) Subsidiarily: a **new trial** before a tribunal previously established by law, with full guarantees and exclusion of all evidence obtained under torture.
 - c) The **investigation, prosecution and punishment** of the officials responsible for the acts of torture, enforced disappearance and abuse of power, including Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo and Colonel Hannover Guerrero.
 - d) **Comprehensive reparation** to the victim, including measures of physical and psychological rehabilitation, compensation for material and moral damages, satisfaction and guarantees of non-repetition.
 - e) As a **guarantee of non-repetition**, the **declaration of unconstitutionality and repeal** of TSJ Plenary Resolution No. 2012-0026, which created the special national-jurisdiction terrorism tribunals, due to violation of legal reserve and the natural-judge principle.
4. Should the State fail to comply with the recommendations, **submit the case to the Inter-American Court of Human Rights** for the corresponding effects (with the procedural caveat regarding Venezuela's denunciation of the ACHR and the consequent jurisdictional discussion).
-

VIII. EXHIBITS

The following are submitted in digital format:

1. Judgment No. 682/05-12-2024 of the TSJ Criminal Cassation Chamber, Docket C24-445.
2. Judgment No. 048/08-08-2018 of the TSJ Plenary (Requesens case), Docket 2018-0071.
3. Judgment No. 049/08-08-2018 of the TSJ Plenary (Borges case), Docket 2018-000072.
4. Judgments Nos. 247-255/16-08-2018 of the TSJ Criminal Cassation Chamber (batch of 9 extraditions to Peru), Dockets E18-205 to E18-213.
5. Judgment No. 098/29-09-2021 of the TSJ Criminal Cassation Chamber (Marín Chaparro precedent — sua sponte avocamiento in special jurisdiction).
6. Judgment No. 317/29-07-2010 of the TSJ Criminal Cassation Chamber (Del Valle Alliegro precedent).
7. Press reports:
8. Infobae, "The story of torture and abandonment of Alberto José Bracho", 4 August 2019.
9. Infobae, "Five convicted denounced torture in the prosecutor's presence", 24 May 2024.
10. Infobae, "Who are the 17 civilians convicted", 4 August 2022.
11. Infobae, "The court uses fake experts and does not respect public trial", 13 December 2020.
12. Suprema Injusticia, "Drone case: 4 years of procedural delay and sentences up to 30 years".
13. Acceso a la Justicia, analysis of TSJ Resolution 2012-0026.
14. Reports of the UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela (OHCHR, 2020, 2022, 2024).

15. Human Rights Watch, *World Report 2025 — Venezuela*.

16. Text of TSJ Plenary Resolution No. 2012-0026 published in Official Gazette 40.092 of 17/01/2013.

17. Public document "Human Rights Case File — Alberto José Bracho Rozquez" published at <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> (Spanish version at <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>).

Signed at ____, on this _ day of _ 202__.

[NAME OF LEAD PETITIONER] [ORGANIZATION — IACHR STANDING] [BAR / PROFESSIONAL REGISTRY NUMBER]

[CO-PETITIONER] [ORGANIZATION]

Document prepared by Lex Venezuela Prime — for co-sponsorship and signature by an organization with IACHR standing (CEJIL / Robert F. Kennedy Human Rights / Foro Penal Venezuela / Acceso a la Justicia).

Carta a Foro Penal (Alfredo Romero)

Solicitud de representación local y co-patrocinio internacional

Foro Penal Venezuela — Atención: Dr. Alfredo Romero, Director Ejecutivo

Para: Foro Penal Venezuela **A la atención de:** Dr. Alfredo Romero, Director Ejecutivo · Sra. Gonzalo Himiob Santomé, Director **Vía:** correo institucional + comunicación cifrada **Fecha:** ____ de mayo de 2026 **Asunto:** Caso Alberto José Bracho Rozquez (caso del dron, 4 de agosto de 2018) — Solicitud de representación local y co-patrocinio internacional

Estimado Dr. Romero, estimado Dr. Himiob:

Nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente la **representación local en Venezuela** y el **co-patrocinio internacional** del expediente del ciudadano **Alberto José Bracho Rozquez** (cédula V-21.078.752, alias "Porto"), uno de los 17 civiles condenados en el llamado "**caso del dron**" del 4 de agosto de 2018, actualmente recluso en el Centro Penitenciario Yare III, Estado Miranda, cumpliendo pena de 30 años.

Resumen del caso

- Joven civil zuliano detenido el 5 de agosto de 2018 a las 02:30 a.m. en una alcabala de la PNB en autopista hacia Barinas — sin orden judicial, sin flagrancia.
- Desaparecido por **45 días** en sótanos del DGCIM Boleíta Norte.
- Tortura denunciada en juicio oral del 24 de mayo de 2024 en presencia del Fiscal Farik Karin Mora Salcedo (junto con Brayan Oropeza, Yolmer Escalona, Argenis Valera y Juan Carlos Monasterios).
- Condenado a 30 años el 2 de agosto de 2022 por el Tribunal Primero de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional (Jueza Hennit López Mesa).
- Apelación SIN LUGAR el 21 de marzo de 2024.
- Casación DESESTIMADA el 5 de diciembre de 2024 (Sala Penal Sent. 682, Exp. C24-445, Magistrada Ponente Elsa Janeth Gómez Moreno).
- **Hecho documental crítico:** ningún recurso de casación fue presentado a nombre individual de Bracho Rozquez — abandono defensorial total al nivel del recurso extraordinario.

Expediente preservado

Hemos preservado el récord probatorio en una página pública dedicada:

- Español: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>
- Inglés: <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>

Y tenemos drafts listos para firma de:

1. **Solicitud de Revisión Constitucional** ante la Sala Constitucional del TSJ (15 páginas).
2. **Petición CIDH con Medidas Cautelares** (versiones ES + EN, 12 páginas cada una).
3. Drafts pendientes para WGAD-ONU, FFM-Venezuela, Relator Especial sobre Tortura, comunicación CPI Caso Venezuela I.

Solicitud específica

Solicitamos a Foro Penal Venezuela:

1. **Asumir la representación local** de Alberto José Bracho Rozquez en Venezuela, con ejercicio de los recursos internos pendientes (revisión constitucional, avocamiento, amparo por condiciones de detención).
2. **Contacto con la familia** en Maracaibo, Estado Zulia — Foro Penal posee la red logística que nosotros no tenemos.
3. **Co-firma de la petición CIDH** con su standing institucional consolidado.
4. **Inclusión del caso** en el próximo informe periódico de Foro Penal sobre presos políticos.
5. **Acceso a evaluación médica independiente** bajo Protocolo de Estambul, idealmente vía la red médica que Foro Penal coordina con UCAB y otras instituciones.

Plazos críticos

- El plazo de 6 meses para acceso al sistema interamericano vía petición regular caduca aproximadamente el **5 de junio de 2025**, contado desde la notificación de la Sentencia 682/2024.
- La situación de salud y aislamiento de Bracho — y de los otros 15 co-condenados a penas largas — exige acción urgente.

Quedamos a su entera disposición para reunión virtual o presencial en la oportunidad que ustedes indiquen, y nos comprometemos a entregar el expediente completo (sentencias TSJ extraídas, dossier ES+EN, drafts) por la vía segura que ustedes designen.

Agradecemos profundamente el trabajo que Foro Penal ha realizado durante años por las víctimas de la persecución política venezolana — y solicitamos sumar este caso a la red de defensa.

Atentamente,

[FIRMA / ORGANIZACIÓN PETICIONARIA] contacto@_____

Adjuntos: - Dossier completo en español (~22K palabras): `dossier-bracho-rozquez-ES.md` - Dossier completo en inglés (~22K palabras): `dossier-bracho-rozquez-EN.md` - Draft Solicitud de Revisión Constitucional - Draft Petición CIDH con MC (ES + EN) - 12 sentencias TSJ extraídas en texto plano (~2 MB)

Carta a Provea

Solicitud de documentación e incidencia

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Para: Provea — Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos **A la atención de:** Coordinador General · Equipo de Defensores y Defensoras **Vía:** correo institucional **Fecha:** ____ de mayo de 2026 **Asunto:** Caso Alberto José Bracho Rozquez (caso del dron, 4 de agosto de 2018) — Solicitud de inclusión en informes anuales y de incidencia

Estimado equipo de Provea:

Nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente la **inclusión del caso del ciudadano Alberto José Bracho Rozquez** (cédula V-21.078.752) en los informes anuales sobre derechos humanos en Venezuela, así como **el acompañamiento documental e incidencia política** del caso.

Síntesis

Alberto José Bracho Rozquez es un joven civil zuliano, hoy de aproximadamente 36 años, condenado a 30 años de prisión en el "caso del dron" del 4 de agosto de 2018. Permanece recluido en el Centro Penitenciario Yare III, Estado Miranda, lejos de su familia en Maracaibo. La sentencia condenatoria fue confirmada en apelación (21 de marzo de 2024) y en casación (TSJ Sala Penal Sent. 682 del 5 de diciembre de 2024) sin que se hubiera presentado recurso de casación a su nombre individual — abandono defensorial total.

El caso encaja con el patrón estructural que Provea ha documentado en sus informes anuales: detención sin orden judicial, desaparición forzada por 45 días, custodia militar de civiles en DGCIM, tortura denunciada en juicio oral en presencia del fiscal del caso, juzgamiento por tribunal especial creado por resolución administrativa.

Solicitud específica

- Inclusión** del caso de Bracho Rozquez en el próximo Informe Anual de Provea, capítulo sobre "Derecho a la libertad personal" y/o "Derecho a la integridad personal".
- Documentación independiente** de las violaciones, idealmente con visita o entrevista familiar en Maracaibo.
- Acompañamiento de la denuncia pública** del caso ante medios y organismos internacionales.

4. **Coordinación con Foro Penal y CEPAZ** en la estrategia interna y externa.
5. **Apoyo técnico** en la redacción de la comunicación a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM-Venezuela), donde Provea ha sido fuente histórica.

Materiales disponibles

Hemos preservado el récord en una página pública dedicada en tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/ (ES) y tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/ (EN), con cronología, sentencias TSJ verificadas con URLs canónicas, mapeo de violaciones constitucionales y convencionales, precedentes locales de avocamiento y nulidad (Sala Penal 098/2021 y 317/2010), lista completa de los 17 co-condenados con su estado actual, y plan de internacionalización en 5 niveles.

Quedamos a su disposición para coordinar acción conjunta.

Atentamente,

[FIRMA / ORGANIZACIÓN PETICIONARIA]

Carta a CEPAZ

Solicitud de análisis técnico-jurídico

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Para: Centro de Justicia y Paz — CEPAZ **A la atención de:** Beatriz Borges, Directora Ejecutiva **Vía:** correo institucional **Fecha:** ____ de mayo de 2026 **Asunto:** Caso Alberto José Bracho Rozquez — Solicitud de análisis técnico-jurídico y co-firma de comunicaciones internacionales

Estimada Dra. Borges, estimado equipo de CEPAZ:

Nos dirigimos a ustedes para solicitar la **revisión técnico-jurídica** y eventual **co-firma de las comunicaciones internacionales** que estamos preparando en el caso de **Alberto José Bracho Rozquez** (cédula V-21.078.752), uno de los 17 condenados en el "caso del dron" del 4 de agosto de 2018 contra el ciudadano Presidente de la República.

Por qué CEPAZ

CEPAZ ha jugado un rol decisivo en la documentación de la persecución de género (caso "Las heroínas"), del trato a presos políticos, y de los obstáculos al acceso a la justicia en Venezuela. La metodología jurídica de CEPAZ y la calidad de sus informes ante el sistema universal y el sistema interamericano son referente obligado.

El caso Bracho contiene varias capas que hacen pertinente la mirada CEPAZ:

- **Patrón sistémico** de tortura DGCIM en presencia del fiscal del caso (5 condenados denunciaron lo mismo en audiencia).
- **Defensa técnica abandonada** al nivel del recurso de casación (sin paralelo conocido en otros casos de pena máxima).
- **Tribunal especial nacional creado por resolución administrativa** del TSJ — vicio estructural que afecta a otros expedientes de la misma jurisdicción.
- **Co-condenada Emirlendris Benítez** (caso de género: tortura DGCIM, pérdida de embarazo, silla de ruedas) — caso conexo al de Bracho que CEPAZ ha tocado.

Solicitud específica

1. **Revisión técnico-jurídica** del draft de Solicitud de Revisión Constitucional ante el TSJ y de la Petición CIDH con MC.
2. **Co-firma** de la comunicación al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD-ONU).
3. **Co-firma** de la comunicación a la FFM-Venezuela.
4. **Coordinación** con Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia para una estrategia coherente.
5. **Eventual representación** ante la CIDH si CEJIL o RFK Human Rights no asumen.

Materiales disponibles

- Página pública: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> (ES) y <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> (EN).
- Dossiers ES + EN listos para conversión a PDF.
- 12 sentencias TSJ extraídas con URLs canónicas verificadas.
- Drafts de Revisión, Petición CIDH y comunicaciones ONU.

Agradecemos profundamente el acompañamiento técnico que CEPAZ realiza por las víctimas que el sistema interno deja sin voz.

Atentamente,

[FIRMA / ORGANIZACIÓN PETICIONARIA]

Carta a CEJIL (bilingüe)

Solicitud de co-litigio ante la CIDH

CEJIL — Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Para: CEJIL — Center for Justice and International Law **A la atención de:** Equipo Programa Andino · Equipo Litigio Estratégico **Vía:** correo institucional + formulario de aceptación de casos **Fecha:** ____ de mayo de 2026 **Asunto:** Caso Alberto José Bracho Rozquez v. Venezuela — Solicitud de co-litigio ante la CIDH con Medidas Cautelares urgentes

Estimado equipo de CEJIL:

Nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente la **representación y co-litigio** del caso de **Alberto José Bracho Rozquez** (cédula venezolana V-21.078.752) ante la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos**, con solicitud simultánea de **Medidas Cautelares urgentes** conforme al artículo 25 del Reglamento.

Adecuación del caso al perfil CEJIL

El caso reúne los elementos que CEJIL ha priorizado históricamente en su litigio estratégico:

1. **Patrón sistémico:** forma parte del más amplio "caso del dron" del 4 de agosto de 2018, con 17 civiles condenados, 5 con denuncias documentadas de tortura, todos juzgados por tribunales especiales creados por resolución administrativa.
2. **Tortura denunciada en presencia del fiscal del caso:** Bracho declaró en audiencia pública del 24 de mayo de 2024 que el Fiscal Farik Karin Mora Salcedo estuvo presente durante los actos de tortura — patrón sin precedente reciente en la región.
3. **Desaparición forzada por 45 días** en sótanos del DGCIM Boleíta Norte — configuración paradigmática según *Anzualdo Castro v. Perú* y *Heliodoro Portugal v. Panamá*.
4. **Defensa técnica abandonada al nivel de casación:** ningún recurso fue presentado a nombre individual de Bracho, lo cual surge de la propia Sentencia 682/2024 del TSJ — caso paradigmático de violación del 8.2.d-e CADH análogo a *Ruano Torres v. El Salvador*.
5. **Tribunal especial creado por resolución administrativa** y no por ley — abre la posibilidad de pedir como garantía de no repetición la declaratoria de inconstitucionalidad de la Resolución TSJ N° 2012-0026.

6. **Cuestiones jurisdiccionales complejas con Venezuela** post-denuncia ACHR (2012/2013) — adecuadas para el litigio estratégico de CEJIL.

Solicitud específica

1. **Asumir el litigio principal** ante la CIDH como peticionario con standing.
2. **Presentar la solicitud de Medidas Cautelares** — plazo crítico, vence ~5 de junio de 2025.
3. **Co-coordinar con Foro Penal Venezuela** para la representación local en Venezuela.
4. **Eventual sometimiento** del caso a la Corte IDH si el Estado no cumple las recomendaciones, con la advertencia procesal sobre la denuncia venezolana de la CADH.

Materiales disponibles

- **Petición CIDH borrada (ES + EN)**: drafts completos de 12-15 páginas listos para revisión, edición y firma por CEJIL.
- **12 sentencias TSJ extraídas** del expediente con URLs canónicas verificadas.
- **Página pública**: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> (ES) y <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> (EN).
- **Mapeo completo** de violaciones constitucionales y convencionales (8 categorías) con jurisprudencia interamericana citada.
- **Análisis del agotamiento** de recursos internos y excepciones aplicables del art. 46.2 ACHR/Reglamento.

Quedamos a su disposición para reunión virtual.

Atentamente,

[FIRMA / ORGANIZACIÓN PETICIONARIA INICIAL]

REQUEST FOR CO-LITIGATION BEFORE THE IACHR (English summary)

To: CEJIL — Center for Justice and International Law **Re:** Bracho Rozquez v. Venezuela — Request for co-litigation before IACHR with urgent precautionary measures.

We request CEJIL to assume the principal litigation before the Inter-American Commission on Human Rights of the case of **Alberto José Bracho Rozquez** (Venezuelan ID V-21.078.752), one of 17 civilians convicted in the "drone case" of 4 August 2018 against the Venezuelan President. Critical 6-month deadline for ordinary petition expires ~5 June 2025 (counted from notification of TSJ Judgment 682/2024).

Key adequation to CEJIL's strategic-litigation profile: systemic pattern; torture documented in the prosecutor's presence; 45-day enforced disappearance at DGCIM; total abandonment of defence at cassation level; special tribunal created by administrative resolution; complex jurisdictional questions post-Venezuelan denunciation of ACHR.

Drafts of petition with precautionary measures (ES + EN), full evidentiary record (12 TSJ judgments), and public case file in both languages available. Public URLs:

- Spanish: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>
- English: <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>

We remain available for a virtual meeting at your earliest convenience.

[SIGNATURE / INITIAL PETITIONING ORGANIZATION]

Letter to Robert F. Kennedy Human Rights

REQUEST FOR INTERNATIONAL LEGAL REPRESENTATION

Robert F. Kennedy Human Rights — Partners for Human Rights Program

To: Robert F. Kennedy Human Rights — International Advocacy / Partners for Human Rights **Attention:** Executive Director · Strategic Litigation Director **Via:** institutional email + intake form **Date:** ____ May 2026 **Re:** Case of Alberto José Bracho Rozquez v. Bolivarian Republic of Venezuela — Request for international legal representation before the IACHR with urgent precautionary measures

Dear Robert F. Kennedy Human Rights team,

We respectfully request **international legal representation and co-litigation** of the case of **Alberto José Bracho Rozquez** (Venezuelan ID V-21.078.752, alias "Porto"), a young civilian from Zulia State, Venezuela, currently serving a 30-year sentence at Yare III Prison after being convicted in the so-called "drone case" of 4 August 2018 against President Nicolás Maduro.

Why this case fits RFK Human Rights' strategic profile

- 1. Documented torture in the prosecutor's presence.** Five co-convicts, including Bracho, denounced in open court (24 May 2024 hearing) that they were tortured in the presence of Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo. A pattern with virtually no recent regional precedent, which deserves international visibility.
- 2. 45-day enforced disappearance** in the basement cells of the Directorate General of Military Counterintelligence (DGCIM) in Caracas — a paradigmatic configuration under *Anzualdo Castro v. Peru* (IACtHR, 2009) and *Heliodoro Portugal v. Panama* (IACtHR, 2008).
- 3. Defence counsel total abandonment at the cassation stage.** This is documentarily proven by the very TSJ Judgment 682/2024 listing the 9 cassation appeals filed — none on Bracho's behalf. His name appears only in the dispositive section as one of 12 co-convicted to 30 years. This violates ACHR articles 8.2(d)-(e), analogous to *Ruano Torres v. El Salvador* (IACtHR, 2015).
- 4. Special national-jurisdiction tribunal** created by TSJ Plenary Resolution No. 2012-0026 (an administrative resolution of the TSJ, not by statute), in violation of the natural-judge guarantee and legal-reserve principle. The case opens an opportunity to seek, as a guarantee of non-repetition, the

international recommendation to repeal the resolution that affects multiple political prisoners' due process.

5. **Strategic linkage with Venezuela transition negotiations.** Co-defendant Juan Carlos Requesens (8 years) was released on 18 October 2023 as part of the Barbados Agreement and the US-Venezuela exchange. Bracho is a candidate for inclusion in future humanitarian-exchange lists — but only if his case is internationally documented as arbitrary detention. International advocacy by RFK Human Rights would directly increase that probability.

Specific request

1. **Assume international legal representation** before the Inter-American Commission on Human Rights as petitioner with standing.
2. **File the urgent precautionary-measures request** under article 25 of the IACHR Rules — critical 6-month deadline for ordinary petition expires ~5 June 2025 (counted from notification of TSJ Judgment 682/2024 of 5 December 2024).
3. **Co-coordinate with Foro Penal Venezuela** for local representation and CEJIL for inter-American litigation strategy.
4. **High-level advocacy:** include the case in RFK Human Rights' policy advocacy with the US Department of State, the European Union, and the OAS Secretariat for the Promotion of Human Rights.
5. **Coordinate the public visibility strategy** through RFK Human Rights' international media network.

Available materials

- **Public case file** (bilingual, structured, peer-reviewable):
- English: <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>
- Spanish: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>
- **Standalone PDF-ready dossiers** in both languages.
- **Draft IACHR petition with precautionary measures** in ES and EN, ready for editing and signature.
- **12 TSJ judgments** extracted in plain text (~2 MB), with verified canonical URLs.
- **Comprehensive mapping** of constitutional and conventional violations (8 categories) with cited Inter-American case law.
- **Domestic-precedent table** including TSJ Criminal Cassation Chamber Judgments 098/2021 (Marín Chaparro) and 317/2010 (Del Valle Alliegro) — sua sponte annulments of special-jurisdiction convictions, technical ammunition for the petition.

Critical deadline

The 6-month deadline for ordinary petition expires approximately on 5 June 2025. Beyond that date, only the precautionary-measures track and the systemic-thematic communication remain viable.

We remain available for a virtual meeting at your earliest convenience and commit to deliver the full case record by any secure channel you designate.

We deeply appreciate the historical advocacy of Robert F. Kennedy Human Rights for victims of arbitrary detention in Latin America — and respectfully ask that this case be added to your portfolio.

Sincerely,

[SIGNATURE / INITIAL PETITIONING ORGANIZATION] contact@_____

Letter to CASLA Institute (ICC)

REQUEST FOR ICC ARTICLE 15 SUBMISSION

CASLA Institute — Center for Latin American Studies on Human Rights

To: CASLA Institute — Center for Latin American Studies on Human Rights **Attention:** Tamara Sujú, Executive Director · ICC Submissions Coordinator **Via:** institutional email **Date:** ____ May 2026 **Re:** Case of Alberto José Bracho Rozquez — Request for inclusion in additional Article 15 communication to the ICC Office of the Prosecutor (Venezuela I situation)

Dear Dra. Sujú, dear CASLA Institute team:

We respectfully request the **inclusion of the case of Alberto José Bracho Rozquez** (Venezuelan ID V-21.078.752) in your forthcoming additional **Article 15 Rome Statute communication** to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, in the framework of the **Venezuela I situation** (formal investigation opened on 3 November 2021).

Why this case fits CASLA's ICC submission line

CASLA Institute has developed the most rigorous Latin-American methodology for documenting crimes against humanity in Venezuela for ICC purposes. The Bracho case fits precisely the patterns CASLA has documented:

1. **Imprisonment in violation of fundamental rules of international law** (Rome Statute, art. 7.1.e):
 2. Arrest without warrant or flagrancy
 3. 45-day enforced disappearance
 4. Custody of a civilian in a military intelligence facility (DGCIM Boleíta Norte)
 5. Trial before a tribunal not previously established by law
6. **Torture** (Rome Statute, art. 7.1.f):
 7. Hooding, electric shocks to genitals, removal of toenails, fracture of ribs, broken nasal septum
8. **In the documented presence of the prosecutor handling the case** (Farik Karin Mora Salcedo) — this fact alone elevates the act from individual torture to systemic State-policy torture
9. Failure of the trial court to investigate after the in-court denunciation
10. **Persecution** (Rome Statute, art. 7.1.h):

11. Bracho was a young civilian opposition protester, photographed alone with raised hands before a National Guard formation — a low-profile civilian targeted for political opinion
12. Selective recharacterisation of crimes between civilian and military defendants in the same docket (Treason maintained for civilians, replaced by Conspiracy for military) demonstrates persecution criterion of differential treatment
13. **Systematic and widespread attack against the civilian population** (Rome Statute, art. 7.1 chapeau):
14. The case forms part of a documented pattern (UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela 2020, 2022, 2024 reports)
15. Tribunal special national-jurisdiction created by TSJ Plenary Resolution No. 2012-0026 — applied to dozens of political dissidents
16. Identifiable command line: from the Office of the Attorney General (Tarek William Saab) through the DGCIM hierarchy to Colonel Hannover Guerrero and Prosecutor Farik Mora Salcedo
17. **Identifiable perpetrators with State authority:**
18. Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo
19. Colonel Hannover Guerrero
20. Trial Judge Hennis Carolina López Mesa
21. Appeals Judges Katherine Haringhton Padrón and Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta
22. TSJ Magistrates who upheld and declined to investigate

Specific request

1. **Inclusion of the case** in the next Article 15 communication submitted by CASLA to the OTP, with full documentation.
2. **Cross-referencing** with the systemic patterns CASLA has already documented (DGCIM detention centre, special tribunals, prosecutor-presence torture).
3. **Identification of perpetrators** by name and rank, where possible, for inclusion in CASLA's perpetrator database.
4. **Coordination** with Human Rights Foundation for parallel high-level US/EU advocacy.

Available materials

- Public case file (bilingual): <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/> (EN) and <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/> (ES).
- Standalone dossiers in EN and ES, structured, with all source URLs.
- 12 TSJ judgments extracted in plain text (~2 MB).
- Mapping of constitutional, conventional and Rome Statute violations.
- Names, ranks and roles of identified State actors (within the limits of public sources).

- List of co-victims and co-defendants with documentary corroboration (5 of the 17 convicts denounced torture in court, supporting the systematic-pattern criterion).

Strategic value

The 17 co-defendants of the drone case form a paradigmatic dossier within Venezuela I. Including Bracho — paradigmatic of the low-profile civilian disappeared, tortured and abandoned at cassation — strengthens the criminal-pattern argument for crimes against humanity. The ICC Article 15 communication mechanism is precisely the vehicle to catalyse OTP attention to a specific, well-documented incident-cluster within the broader situation.

We remain available for technical coordination and stand ready to deliver the full record by any secure channel CASLA designates.

Sincerely,

[SIGNATURE / INITIAL PETITIONING ORGANIZATION]

Letter to Human Rights Foundation

REQUEST FOR INTERNATIONAL ADVOCACY

Human Rights Foundation (HRF)

To: Human Rights Foundation (HRF) **Attention:** Center for Law & Democracy / Director of Strategic Programs **Via:** institutional email **Date:** ____ May 2026 **Re:** Case of Alberto José Bracho Rozquez — Request for international advocacy and ICC support

Dear Human Rights Foundation team:

We respectfully request the **international advocacy support** of HRF for the case of **Alberto José Bracho Rozquez** (Venezuelan ID V-21.078.752), a young civilian from Zulia State currently serving a 30-year sentence at Yare III Prison after being convicted in the so-called "drone case" of 4 August 2018.

Why HRF advocacy matters here

HRF has developed unique expertise on:

1. **Naming political prisoners** in authoritarian regimes — including Bracho would expand the Venezuelan portion of HRF's prisoner-of-conscience database.
2. **Coordinating high-level diplomatic advocacy** with the US Department of State, the European Parliament, the UK Foreign Office, and Latin-American foreign ministries.
3. **Connecting cases to humanitarian-exchange negotiations** — HRF has been a constructive voice in past Venezuelan release negotiations.
4. **Supporting ICC Article 15 communications** — complementary to CASLA Institute's role.

The case in brief

- **Detention:** 5 August 2018, ~02:30 a.m., highway checkpoint toward Barinas, no warrant, no flagrante.
- **Disappearance:** 45 days at DGCIM Boleíta Norte (military intelligence) without family notification.
- **Torture in court:** denounced 24 May 2024 in trial hearing — five co-convicts named Prosecutor Farik Karin Mora Salcedo as having been present during torture (hooding, electric shocks to testicles, removal of toenails, fractured ribs, broken nasal septum).
- **Conviction:** 30 years on 2 August 2022 (published 17 February 2023) — Tribunal Primero de Juicio (National Terrorism Jurisdiction).

- **Appeal denied:** 21 March 2024 — Special Chamber Two of the Court of Appeals (National Terrorism).
- **Cassation dismissed:** 5 December 2024 — TSJ Criminal Cassation Chamber Judgment 682/2024. **No cassation appeal was filed in Bracho's individual name** — total defence abandonment at the highest internal remedy.

Specific request

1. **Add Bracho Rozquez** to HRF's database of Venezuelan political prisoners and prisoners of conscience.
2. **Support the IACHR petition** through international amplification.
3. **Coordinate the ICC Article 15 submission** with CASLA Institute.
4. **Brief US/EU policymakers** on the case for inclusion in future humanitarian-exchange negotiation lists.
5. **Coordinate with Foro Penal Venezuela, CEJIL and RFK Human Rights** to ensure unified messaging.

Available materials

- Public case file:
- English: <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/>
- Spanish: <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/>
- Standalone PDF-ready dossiers in both languages.
- Draft IACHR petition with precautionary measures (ES + EN).
- Draft ICC Article 15 supporting documentation.
- 12 TSJ judgments extracted with verified canonical URLs.

Strategic context

Co-defendant Juan Carlos Requesens (8 years sentence) was released on 18 October 2023 as part of the Barbados Agreement framework and the US-Venezuela exchange involving Alex Saab. At least 59 political prisoners had been released by July 2025; another 35 on 8 February 2026. **Bracho is precisely the type of low-profile, well-documented detainee whose inclusion in future exchange lists is plausible if international advocacy ensures visibility.** This is where HRF's role is decisive.

We remain available for a virtual meeting at your convenience and commit to deliver the full record by any secure channel HRF designates.

Sincerely,

[SIGNATURE / INITIAL PETITIONING ORGANIZATION]

Anexo · Abogados de referencia (Español)

ABOGADOS DE REFERENCIA — Caso Bracho Rozquez

Mapa de referencia para construir el equipo de defensa Documento preparado por: Lex Venezuela Prime · Mayo 2026 **Versión pública:** <https://tuvzla.com/casos-ddhh/bracho-rozquez/#abogados-recomendados>

AVISO: Esta sección es resultado de un análisis algorítmico sobre el corpus público del TSJ (435.000+ decisiones) cruzado con conocimiento público del bar venezolano. NO es asesoría legal personalizada ni recomendación profesional formal — es un mapa de partida verificable para que la familia, organizaciones aliadas o un nuevo defensor identifiquen con quién hablar. La decisión final de representación legal debe tomarla el justiciable o su familia con base en una conversación directa con el abogado y un análisis del conflicto de interés en cada caso.

TIER 1 · Defensores que ya intervinieron en el expediente del Drone Caracas

Los 6 abogados que recurrieron en casación a nombre de los otros co-condenados, según consta en la TSJ Sent. 682 del 5 de diciembre de 2024. Conocen el expediente, los magistrados ponentes y la jurisprudencia aplicada.

CAVEAT documental: el cruce algorítmico estricto de cada nombre con su número de Inpreabogado en otros expedientes del TSJ devuelve cero apariciones — lo que sugiere que pueden ser defensores públicos o privados con poca práctica regular ante la Sala Penal, asignados por afinidad y no por experticia técnica acumulada.

Abogado	INPRE	Defendió en este caso	Resultado obtenido
Joel Antonio García Hernández	84.674	Juan Carlos Requesens (8 años) + José Eloy Rivas (20 años)	Sentencia más baja del expediente; Requesens LIBERADO en oct/2023 (Acuerdo de Barbados)
Juan Luis González Taguaruco	45.027	Ángela Expósito (24 años) + Oswaldo Castillo (30 años)	30 años para Castillo; 24 para Expósito
Stefania Migliorini Camposano	262.683	Emirlendris Benítez + Yolmer Escalona (30 años c/u)	30 años para ambos; perfil DDHH (caso Benítez con tortura DGCIM)
Zoraida Castillo de Cárdenas	13.879	Héctor Hernández Da Costa (16 años) + Pedro Zambrano (30 años)	16 años para el general en tribunal civil
Gracimar Del Valle Fierro	58.867	Juan Carlos Monasterios Vanegas (30 años)	30 años
Eliécer Peña Granda + Yalira Granda	12.130 + 14.920	Alejandro Pérez Gámez (30 años)	30 años

TIER 2 • Constitucionalistas y penalistas con récord en defensa política (corpus TSJ + conocimiento público)

Ranqueado por apariciones documentadas en el corpus TSJ con mención simultánea de contexto defensivo. Los nombres aquí cumplen con perfil técnico para la Solicitud de Revisión Constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ y/o para integrar el equipo de litigio ante el sistema interamericano.

#	Abogado	TSJ apps	En defensa	Perfil clave
1	Juan Carlos Gutiérrez	125	106	Defensor histórico de presos políticos. Volumen líder del Tier.
2	Alfredo Romero (Foro Penal)	110	78	Director Ejecutivo Foro Penal. Acceso institucional + red de defensores.
3	Antonio Canova González	83	63	Constitucionalista, escritos sólidos.
4	José Vicente Haro	79	52	Constitucionalista joven, perfil mediático.
5	Carlos Ayala Corao	55	33	EX-PRESIDENTE DE LA CIDH (1996-1999). Ideal para puente revisión-CIDH.
6	Gustavo Linares Benzo	50	29	Constitucionalista UCAB.
7	Gonzalo Himiob Santomé	49	41	Co-fundador Foro Penal, especialista en presos políticos.
8	Theresly Malavé	31	27	100% defensa — especialista declarada en presos políticos.
9	Juan Manuel Raffalli	25	16	Constitucionalista, asesoría a oposición.
10	Allan Brewer-Carías	19	12	Autoridad doctrinal mundial. En exilio — usar como respaldo doctrinario, no como firmante.
⚠	Hermann Escarrá	80	54	NO RECOMENDADO. Alineado al gobierno — conflicto de interés.

TIER 3 · Penalistas con récord medible en Sala de Casación Penal y Sala Constitucional (extracción algorítmica)

Abogados con múltiples casos en Salas Penal y Constitucional del TSJ y ratio favorable de decisiones positivas (CON LUGAR / nulidad / sobreseimiento) sobre negativas (SIN LUGAR / desestimadas). Menos famosos, pero con número objetivo de victorias contables.

Abogado	INPRE	Casos	Pos.	Neg.	Score
Hector J. Guilarte H.	142.510	6	12	0	24.0
Pedro José Troconis Da Silva	34.395	14	4	2	19.4
Manuel Assad Brito	31.580	12	5	6	17.7
José Joel Gómez Cordero	32.811 / 57.049	15	3	6	17.7
Roberto Gómez González	39.768	7	7	7	15.4
Jorge Tahan Bittar	7.603 / 7.606	4	9	8	15.1
Eric Lorenzo Pérez Sarmiento	105.200 / 71.932	9	3	2	12.9
José Santiago Rodríguez Simancas	75.289	5	5	0	12.5 (sin derrotas en muestra)
Carlos Eduardo Aponte González	59.916	6	5	4	12.3
Ricardo Baroni Uzcátegui	49.200 / 49.220	7	4	3	12.1
León Benshimol Salamanca	76.696	5	4	4	9.8
Mario Eduardo Trivella	55.456	6	3	4	9.3

TIER 4 • Soporte internacional / CPI / Sistema interamericano

Persona u organización	Rol clave
CEJIL — Centro por la Justicia y el Derecho Internacional	Único ente con histórico ganador ante Corte IDH para casos venezolanos. Co-litigio principal CIDH.
Tamara Sujú Roa (CASLA Institute)	Comunicación adicional Art. 15 ER ante la Fiscalía CPI — Caso Venezuela I.
Robert F. Kennedy Human Rights	Litigio + advocacy política internacional (Departamento de Estado EE.UU., UE, OEA).
Human Rights Foundation (HRF)	Base de datos de presos políticos + advocacy de canjes humanitarios.
Reed Brody (consultor HRW)	Litigio internacional emblemático — soporte estratégico.
Liliana Ortega (COFAVIC)	30+ años de litigio en DDHH Venezuela.

Equipo de defensa recomendado (3-4 personas)

- CABEZA LOCAL EN CARACAS** (firma escritos en TSJ): Juan Carlos Gutiérrez como 1ra opción (volumen y trayectoria) o Joel Antonio García Hernández (Tier 1, ya conoce el expediente). Backup: Theresly Malavé.

2. **CONSTITUCIONALISTA DE RESPALDO DOCTRINAL** (firma como segundo/asesor): Carlos Ayala Corao — su nombre en la solicitud de revisión + en la petición CIDH le da peso académico e internacional inmediato. Alternativa: José Vicente Haro o Antonio Canova González.
 3. **COORDINADOR INSTITUCIONAL** (red, recursos, visibilidad): Alfredo Romero o Gonzalo Himiob (Foro Penal) — gestionan acceso a la familia en Maracaibo, evaluación médica, comunicación con CIDH y monitoreo internacional.
 4. **SOPORTE INTERNACIONAL SIMULTÁNEO**: CEJIL + Tamara Sujú/CASLA Institute + RFK Human Rights + Human Rights Foundation. Las 7 cartas de co-patrocinio con propuesta específica para cada uno ya están redactadas en este expediente.
-

Metodología

Análisis algorítmico sobre el corpus de 435.000+ decisiones del TSJ recolectado en la base local de tuvzla.com (~/tsj-index/). Para cada abogado se contaron apariciones distintas en decisiones, presencia en contextos defensivos (palabras clave: defensor, apoderado judicial, en representación de acusado/imputado/penado), distribución por sala y resultados positivos vs. negativos en decisiones cercanas. Tier 2 incluye además cruce con conocimiento público del bar venezolano de defensa política. Esta lista NO contempla disponibilidad real, conflictos de interés del abogado, sus honorarios actuales ni su voluntad de tomar el caso — todo eso debe verificarse en conversación directa.

Annex · Reference attorney roster (English)

REFERENCE ATTORNEY ROSTER — Bracho Rozquez Case

Reference map for building the defence team Prepared by: Lex Venezuela Prime · May 2026 **Public version:** <https://tuvzla.com/cases-hr/bracho-rozquez/#attorneys>

DISCLAIMER: *This section is the result of an algorithmic analysis of the public TSJ corpus (435,000+ decisions) cross-referenced with public knowledge of the Venezuelan political-defence bar. It is NOT personalised legal advice nor a formal professional recommendation — it is a verifiable starting map so that family, allied organisations or new defence counsel can identify whom to contact. Final representation decisions must be made by the defendant or their family through direct conversation with each attorney and case-by-case conflict-of-interest analysis.*

TIER 1 · Defence counsel already involved in the Drone Caracas docket

The 6 attorneys who filed cassation appeals on behalf of the other co-convicted defendants, as recorded in TSJ Judgment 682 of 5 December 2024. They know the file, the reporting magistrates and the applied case law.

DOCUMENTARY CAVEAT: a strict cross-reference of each name with their Inpreabogado number in other TSJ dockets returns zero hits — suggesting they may be public defenders or private attorneys with limited regular practice before the Criminal Cassation Chamber, assigned by political affinity rather than by accumulated technical expertise.

Attorney	INPRE	Defended in this case	Outcome obtained
Joel Antonio García Hernández	84,674	Juan Carlos Requesens (8 yrs) + José Eloy Rivas (20 yrs)	Lowest sentence in the docket; Requesens RELEASED Oct 2023 (Barbados Agreement)
Juan Luis González Taguaruco	45,027	Ángela Expósito (24 yrs) + Oswaldo Castillo (30 yrs)	30 yrs for Castillo; 24 for Expósito
Stefania Migliorini Camposano	262,683	Emirlendris Benítez + Yolmer Escalona (30 yrs each)	30 yrs for both; HR profile (Benítez DGCIM-torture case)
Zoraida Castillo de Cárdenas	13,879	Héctor Hernández Da Costa (16 yrs) + Pedro Zambrano (30 yrs)	16 yrs for the General in civilian court
Gracimar Del Valle Fierro	58,867	Juan Carlos Monasterios Vanegas (30 yrs)	30 yrs
Eliécer Peña Granda + Yalira Granda	12,130 + 14,920	Alejandro Pérez Gámez (30 yrs)	30 yrs

TIER 2 • Constitutional and criminal-law specialists with a record in political defence (TSJ corpus + public knowledge)

Ranked by documented appearances in the TSJ corpus with simultaneous mention of defence context. The names listed meet the technical profile required for the Solicitud de Revisión Constitucional before the Constitutional Chamber of the TSJ and/or to integrate the litigation team before the inter-American system.

#	Attorney	TSJ apps	In defence	Key profile
1	Juan Carlos Gutiérrez	125	106	Long-standing defender of political prisoners. Highest volume in the tier.
2	Alfredo Romero (Foro Penal)	110	78	Executive Director of Foro Penal. Institutional access + defenders network.
3	Antonio Canova González	83	63	Constitutional scholar, solid pleadings.
4	José Vicente Haro	79	52	Younger constitutional litigator with media profile.
5	Carlos Ayala Corao	55	33	FORMER PRESIDENT OF THE IACHR (1996-1999). Ideal bridge between domestic review and the IACHR petition.
6	Gustavo Linares Benzo	50	29	UCAB constitutional law professor.
7	Gonzalo Himiob Santomé	49	41	Co-founder of Foro Penal, political-prisoner specialist.
8	Theresly Malavé	31	27	100% defence — declared political-prisoner specialist.
9	Juan Manuel Raffalli	25	16	Constitutional law, opposition advisor.
10	Allan Brewer-Carías	19	12	World-class doctrinal authority. In exile — use as doctrinal backing rather than as signing counsel.
⚠	Hermann Escarrá	80	54	NOT RECOMMENDED. Government-aligned — conflict of interest.

TIER 3 • Criminal-law practitioners with a measurable record in TSJ Criminal Cassation and Constitutional Chambers (algorithmic extraction)

Attorneys with multiple cases in the TSJ Criminal and Constitutional Chambers and a favourable ratio of positive outcomes (granted / nullity / dismissal) over negative ones (denied / dismissed as unfounded). Less prominent publicly, but with an objective count of measurable wins.

Attorney	INPRE	Cases	Pos.	Neg.	Score
Hector J. Guilarte H.	142,510	6	12	0	24.0
Pedro José Troconis Da Silva	34,395	14	4	2	19.4
Manuel Assad Brito	31,580	12	5	6	17.7
José Joel Gómez Cordero	32,811 / 57,049	15	3	6	17.7
Roberto Gómez González	39,768	7	7	7	15.4
Jorge Tahan Bittar	7,603 / 7,606	4	9	8	15.1
Eric Lorenzo Pérez Sarmiento	105,200 / 71,932	9	3	2	12.9
José Santiago Rodríguez Simancas	75,289	5	5	0	12.5 (no losses in sample)
Carlos Eduardo Aponte González	59,916	6	5	4	12.3
Ricardo Baroni Uzcátegui	49,200 / 49,220	7	4	3	12.1
León Benshimol Salamanca	76,696	5	4	4	9.8
Mario Eduardo Trivella	55,456	6	3	4	9.3

TIER 4 • International support / ICC / Inter-American System

Person or organisation	Key role
CEJIL — Center for Justice and International Law	Only entity with a winning track record before the IACtHR for Venezuelan cases. Principal IACHR co-litigation.
Tamara Sujú Roa (CASLA Institute)	Article 15 supplementary communication to the ICC OTP — Venezuela I situation.
Robert F. Kennedy Human Rights	International advocacy + political litigation (US State Department, EU, OAS).
Human Rights Foundation (HRF)	Political-prisoner database + humanitarian-exchange advocacy.
Reed Brody (HRW consultant)	Emblematic international litigation — strategic support.
Liliana Ortega (COFAVIC)	30+ years of human-rights litigation in Venezuela.

Recommended defence team (3-4 persons)

- LOCAL HEAD IN CARACAS** (signs TSJ filings): Juan Carlos Gutiérrez as first option (volume and trajectory) or Joel Antonio García Hernández (Tier 1, already knows the docket). Backup: Theresly Malavé.

2. **DOCTRINAL BACKING CONSTITUTIONALIST** (co-signs as second / advisor): Carlos Ayala Corao — his name on the constitutional-review petition + on the IACHR petition gives immediate academic and international weight. Alternative: José Vicente Haro or Antonio Canova González.
 3. **INSTITUTIONAL COORDINATOR** (network, resources, visibility): Alfredo Romero or Gonzalo Himiob (Foro Penal) — manages access to the family in Maracaibo, independent medical evaluation, coordination with the IACHR and international monitoring.
 4. **PARALLEL INTERNATIONAL SUPPORT**: CEJIL + Tamara Sujú / CASLA Institute + RFK Human Rights + Human Rights Foundation. Seven co-sponsorship letters with a specific proposal for each are already drafted in this case file.
-

Methodology

Algorithmic analysis over the corpus of 435,000+ TSJ decisions collected in the local tuvzla.com database (~/[tsj-index/](#)). For each attorney we counted distinct decision appearances, presence in defence-related contexts (key terms: defensor, apoderado judicial, en representación de acusado/imputado/penado), distribution by chamber, and positive vs. negative outcomes within proximity. Tier 2 also incorporates public knowledge of the Venezuelan political-defence bar. This list does NOT account for actual availability, the attorney's conflict of interest, current fees or willingness to take the case — all of which must be verified through direct conversation.

Anexo · Sentencias del TSJ (extractos)

ANEXO · Sentencias del TSJ en el expediente Bracho Rozquez

Documento de soporte probatorio Preparado por: Lex Venezuela Prime · Mayo 2026 **Fuente:** corpus local de tuvzla.com (`~/tsj-index/`), 435.000+ decisiones del TSJ indexadas

Este anexo contiene **extractos** (las primeras ~4.000 palabras) de las doce (12) sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que mencionan al ciudadano Alberto José Bracho Rozquez (C.I. V-21.078.752) en su texto. Para cada sentencia se incluye:

- Identificación procesal (Sala, número, expediente, fecha, ponente)
- Tipo de procedimiento y resumen de objeto
- URL canónica del TSJ donde reside el texto completo
- Extracto inicial del cuerpo de la decisión

Los textos completos (≈1,7 MB en total) se conservan en archivos planos disponibles bajo solicitud y son accesibles públicamente en cada URL canónica.

01 · TSJ Sala Plena · Sent. 048 · 08/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala Plena
- **Sentencia / Expediente:** N° 048 · Exp. AA10-L-2018-000071
- **Fecha:** 08/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** Maikel José Moreno Pérez
- **Objeto:** Antejjuicio de mérito — Diputado Juan Carlos Requesens Martínez
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

SALA
PLENA

MAGISTRADO-PONENTE:
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

AA10-L-2018-000071

En fecha 08 de agosto de 2018, el ciudadano
TAREK WILLIANS SAAB

,
en su carácter de Fiscal General de la República, según designación hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto Constituyente del 5 de agosto de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.322 extraordinario, de esa misma fecha, consignó escrito ante la Sala Plena de este Máximo Juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando como consecuencia de la detención del ciudadano

JUAN CARLOS REQUESENS MARTINEZ

, venezolano,

titular de la cédula de identidad N°

V-18.757.028

, Diputado a la

Asamblea Nacional por el Distrito Capital, lo siguiente: "...

PRIMERO:

Declare la existencia de la flagrancia en el presente caso motivado a que los tipos penales son de naturaleza permanente, y en consecuencia se declare la no procedencia del antejuicio de mérito...,

SEGUNDO

Se determine la naturaleza

de delitos comunes, y conforme a la decisión N° 1684 del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se proceda al enjuiciamiento del mencionado ciudadano ante los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código

Orgánico Procesal Penal, todo ello por la presunta comisión de los delitos de INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal

vigente, en relación al artículo 99 del texto sustantivo penal; TRAICIÓN A LA PATRIA, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal;

HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405

concatenado con el artículo 406 numeral 3 literal 'a' del Código Penal en relación con el artículo 80

ejusdem

(sic); HOMICIDIO

INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el

artículo 406 numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80

ejusdem

(sic), cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP

JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTE ORTÍZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORÁN

VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY, titulares de la

(sic) cédula (sic) de identidad N° (sic) V-18.298.359, V-18153178,

V-25.477.497, V-CI (sic) 15.700.363, V-18.199.623, V-25.669.526, V-28102157

(sic), respectivamente; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52 de

la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo; FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo

53 de la Ley (sic) contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37

de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo...".

El 08 de agosto de 2018, la Sala Plena designó como ponente al Magistrado Doctor

MAIKEL JOSÉ

MORENO PÉREZ

, para

resolver lo conducente en el expediente identificado con el alfanumérico AA10-L-2018-000071

.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia con fundamento en las consideraciones

[...]

Extracto truncado. Texto completo (83,716 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

02 · TSJ Sala Plena · Sent. 049 · 08/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala Plena
- **Sentencia / Expediente:** N° 049 · Exp. AA10-L-2018-000072
- **Fecha:** 08/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** Juan Luis Ibarra Verenzuela
- **Objeto:** Antejudio de mérito — Diputado Julio Andrés Borges Junyent
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300717-49-8818-2018-2018-000072.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

EN SALA PLENA

Magistrado Ponente: Dr. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

.

Expediente AA10-L-2018-000072

El 8 de agosto de 2017, se recibió en esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, escrito presentado por el ciudadano Tarek Willians Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo al cual solicitó

"(...)

formalmente calificación

(sic)

de situación de flagrancia contra el

ciudadano JULIO ANDRÉS BORGES JUNYENT, venezolano, nacido en fecha 22 de Octubre

(sic)

de 1969, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.

V-10.890.645, en su condición de Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda”
 , en virtud de su participación en
 la
 presunta comisión de los delitos de
 “INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA, previsto
 y sancionado en el artículo 285 del Código Penal vigente, en relación al
 (sic)
 artículo 99 del texto sustantivo penal; TRAICIÓN A LA PATRIA, tipo penal
 previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO
 INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE
 LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el
 artículo 406 numeral 3 literal ‘a’ del Código Penal en relación con el artículo
 80 ejusdem
 (sic)
 ; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON
 ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado
 en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal
 en relación con el artículo 80 ejusdem
 (sic),
 cometido en perjuicio de
 los ciudadanos CAP JOSE
 (sic)
 DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ
 (sic),
 PTTE ORTIZ
 (sic)
 BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO
 DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESUS
 (sic),
 CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN
 (sic)
 VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY, titulares de la
 cédula
 (sic)
 de identidad N°
 (sic)
 V-18.298.359, V-18153178,
 V-25.477.497, V-CI (sic) 15.700.363, V-18.199.623, V-25.669.526, V-28102157
 (sic),
 respectivamente; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley
 Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; FINANCIAMIENTO
 AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley
 (sic)
 contra
 la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ASOCIACIÓN PARA
 DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la
 Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
 “

 (sic) [Negrillas y mayúsculas de la solicitud].

En la oportunidad antes dicha, en cumplimiento de lo acordado por

la Sala Plena, el Magistrado Doctor

Maikel José

Moreno Pérez

, Presidente del Tribunal

Supremo de Justicia procedió a designar ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, para resolver lo conducente en el presente expediente identificado con el alfanumérico AA10-L-2018-000072.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia con fundamento en las consideraciones siguientes:

I

DE LA SOLICITUD DEL FISCAL
GENERAL DE LA REPÚBLICA

En

el escrito presentado ante esta Sala Plena,

el

Fiscal General de la República

Bolivariana de

Venezuela

, luego de referir los mecanismos de protección a la institucionalidad democrática e institucional de la República, como lo es el obstáculo para el ejercicio de la acción penal contra los altos funcionarios del Poder Público (antejuicio de mérito), de acuerdo a lo previsto en los artículos 266, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 37 del Código

[...]

Extracto truncado. Texto completo (96,710 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

03 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 247 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 247 · Exp. E18-206
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — co-conspirador (E18-206)
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301282-247-16818-2018-E18-206.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Magistrado
Ponente

Dr.

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

El quince (15) de agosto de 2018, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente signado con el alfanumérico 01°CT-S006-18, procedente del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados a Delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA

del

ciudadano

OSWALDO VALENTÍN GARCÍA PALOMO

, de nacionalidad venezolana,

identificado con la cédula de identidad nro. V.8.956.956, iniciado por el referido tribunal con ocasión a la orden de aprehensión dictada contra el ciudadano antes señalado, por la presunta comisión de los delitos de

TRAICIÓN A LA PATRIA

,

tipificado en el artículo 128 del Código Penal,

HOMICIDIO

INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

en la persona del

Presidente de la República,

tipificado en el artículo 405 concatenado

con el artículo 406 numeral 3 literal b del Código Penal en relación con el artículo 80

eiusdem

,

HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON

ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

tipificado

en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal

en relación con el artículo 80

eiusdem

, cometido en perjuicio de los

ciudadanos

CAP. JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ

,

PTTE. ORTIZ BELATIS

BENNY

,

TTE. MOLINA TORRES

,

LUIS, S/1 MORENO DARWIN

,
S1
GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORÁN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO
ARMADA

,
GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY

,
respectivamente;
LANZAMIENTO DE ARTEFACTO
EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS

,

tipificado
en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297
eiusdem

,
TERRORISMO
, tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

,

tipificado en el artículo 53 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y,
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

,

tipificado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

.

El
quince (15) de agosto de 2018, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de
haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se le asignó
el número AA30-P-2018-000206 y se designó ponente al Magistrado Doctor
MAIKEL

JOSÉ MORENO PÉREZ
, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos
los trámites procedimentales del caso y siendo
la oportunidad legal, pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la
procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano
OSWALDO
VALENTÍN GARCÍA PALOMO
, de nacionalidad
venezolana, identificado con la cédula de identidad nro. V.8.956.956 y, a tal
efecto,
observa:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

De

las actas que conforman el presente expediente, se observa lo siguiente:

En fecha cinco (5) de agosto de 2018, los abogados FARIK KARIN MORA SALCEDO, VLADIMIR ENRIQUE ÁNGEL AGUILERA y JIMMY LEVY AVRAM

actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público Provisorio Sexagésimo Séptimo a Nivel Nacional con Competencia Plena Contra la Corrupción, Provisorio Trigésimo Octavo a Nivel Nacional con Competencia Plena y, Provisorio Nonagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia Plena Contra la Corrupción, respectivamente, presentaron escrito mediante el cual solicitaron se dicte medida

[...]

Extracto truncado. Texto completo (74,837 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

04 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 248 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 248 · Exp. E18-211
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Elvis Arnaldo Rivas Barrios
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301283-248-16818-2018-E18-211.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Magistrado
Ponente

Dr.
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

El quince (15) de agosto de 2018, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente signado con el alfanumérico GP11-P-2015-000176, procedente del Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con los delitos Asociados al Terrorismo con

Jurisdicción a Nivel Nacional, contenido del procedimiento de
EXTRADICIÓN

ACTIVA

del ciudadano

ELVIS ARNALDO RIVAS BARRIOS

, de nacionalidad

venezolana, identificado con la cédula de identidad nro. V. 15.820.872, iniciado
por el referido tribunal con ocasión a la orden de aprehensión dictada contra
el ciudadano antes señalado, por la presunta comisión de los delitos de

TRAICIÓN A LA PATRIA

,

tipificado en el artículo 128 del Código Penal,

HOMICIDIO

INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

EN LA PERSONA DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

,

tipificado en el artículo 405 concatenado

con el artículo 406 numeral 3 literal b del Código Penal en relación con el
artículo 80

eiusdem

,

HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON

ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

tipificado

en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal
en relación con el artículo 80

eiusdem

, cometido en perjuicio de los
ciudadanos

CAP. JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ

,

PTTE. ORTIZ BELATIS

BENNY

,

TTE. MOLINA TORRES

,

LUIS, S/1 MORENO DARWIN

,

S1

GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORÁN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO
ARMADA

,

GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY

,

respectivamente;

LANZAMIENTO DE ARTEFACTO

EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS

,

tipificado

en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297
eiusdem

,

TERRORISMO

, tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

,

tipificado en el artículo 53 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y,
ASOCIACIÓN

,

tipificado en el artículo 37

de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo

.

El

quince (15) de agosto de 2018, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de
haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se le asignó
el número AA30-P-2018-000211, y se designó ponente al Magistrado Doctor
MAIKEL

JOSÉ MORENO PÉREZ

, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos

los trámites procedimentales del caso y siendo
la oportunidad legal, pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la
procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano

ELVIS

ARNALDO RIVAS BARRIOS

, de nacionalidad venezolana,
identificado con la cédula de identidad nro. V. 15.820.872, a tal efecto,
observa:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta

en las actas que conforman el presente expediente, lo siguiente:

El

cinco (5) de agosto de 2018, el Tribunal
Especial Primero

de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con los delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional

, recibió escrito interpuesto por los

abogados

DINORA JOSELIN BUSTAMANTE PUERTA

,

FARIK KARIN MORA SALCEDO

,

VLADIMIR ENRIQUE ANGEL

AGUILERA

y,

JIMMY LEVY AVRAM

,

actuando en su condición de

Fiscales del Ministerio Público Provisorio Octogésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia Plena Contra la Legitimación de Ca

[...]

Extracto truncado. Texto completo (96,243 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

05 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 249 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 249 · Exp. E18-207
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Julio Andrés Borges Junyent
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301284-249-16818-2018-E18-207.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Ponencia de la Magistrada Doctora
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El

15 de agosto de 2018, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dio entrada a las actuaciones provenientes de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la remisión que hiciera la ciudadana Carol Padilla, Jueza del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Caracas, contentivas del procedimiento de

EXTRADICIÓN ACTIVA

del ciudadano

JULIO ANDRÉS BORGES JUNYENT,

titular

de la Cédula de identidad N°

10.890.645.

El referido ciudadano

es requerido

por las autoridades venezolanas,

por la presunta comisión de los delitos de:

01).- TRAICIÓN

A LA PATRIA,

previsto y sancionado en el artículo

128 del Código Penal,

02).-HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO

EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

previsto

y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 3

literal "b" del Código Penal en relación con el artículo 80

ibídem,

03).-

HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES

EN GRADO DE FRUSTRACIÓN,

previsto y sancionado en el

artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal en

relación con el artículo 80

eiusdem

, cometido en perjuicio de los

ciudadanos

CAP JOSÉ DEL VALLE NUÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ

BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE

JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO

SALAZAR LIZNEIDY

, titulares de la Cédula de Identidad

N°

V- 18.298.359, V-18153178, V-25.477.497, V- CI 15.700.363, V- 18.199.623, V-

25.669.526,

V- 28102157,

respectivamente,

04).-TERRORISMO

previsto

y sancionado en los artículos 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo,

05).-

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO,

previsto y sancionado

en el artículo 53 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento

al Terrorismo.

06).- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR,

previsto

y sancionado en los artículos 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo,

07).-

INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA,
previsto y sancionado
en los artículo 285 del Código Penal y

08).- CONSPIRACIÓN,

previsto

y sancionado en el artículo 132

eiusdem

,

según

procedimiento de

extradición activa

iniciado a solicitud

de los abogados Dinora Joselin

Bustamante Puerta, Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y

Jimmy Levy Avram, Fiscal Provisorio 83° Nacional Contra la Legitimación de

Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Fiscal

Provisorio 67° Nacional Contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal

Provisorio 38° Nacional Pleno del Ministerio Público y Fiscal Provisorio 93°

Nacional Contra la Corrupción del Ministerio Público,

en

virtud de la orden de aprehensión Nro. 034-18, dictada, en fecha 14 de agosto

de 2018,

por el Tribunal Especial Primero de Primera

Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos Vinculados con

Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Caracas.

En igual data (15 de

agosto de 2018), se dio cuenta en la Sala de Casación Penal del recibo del

presente expediente, asignándosele el serial alfanumérico

AA30-P-2018-000207

y, de acuerdo con lo dispuesto en e

[...]

Extracto truncado. Texto completo (194,650 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

06 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 250 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 250 · Exp. E18-212
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Virginia Antonieta Da Silva-Pio Porta
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301285-250-16818-2018-E18-212.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Ponencia de la Magistrada Doctora
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El
15 de agosto de 2018, se recibió, en la Secretaría de la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, las actuaciones provenientes del Tribunal
Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Control con Competencia
en casos Vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a
Nivel Nacional, con sede en Caracas, contentivas del procedimiento de
EXTRADICIÓN

ACTIVA
de la ciudadana
VIRGINIA ANTONIETA DA SILVA-PIO PORTA

,
titular de la Cédula de Identidad venezolana

N°
7.828.866

.
En esa misma fecha se le dio entrada al asunto.

La referida ciudadana
es
requerida
por las autoridades venezolanas,
por la presunta
comisión de los delitos de:

"...
01).- TRAICIÓN A LA PATRIA

,
previsto y
sancionado en el artículo 128 del Código

Penal.

02).-HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE
FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

,
previsto y
sancionado en el

artículo 405 concatenado con el artículo
406 numeral 3 literal 'b' del Código Penal en relación con el artículo 80
eiusdem.

03).- HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO
CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN,
previsto y
sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del
Código Penal en relación con el artículo 80 ejusdem, cometido en perjuicio de
los ciudadanos

CAP

JOSÉ DEL VALLE
NUÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE.

MOLINA TORRES,
LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS,

CAD/3 AMGNB.
HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA

GUERRERO
SALAZAR LIZNEIDY
, titulares de la Cedula de Identidad
N° V-
18.298.359, V 18.153.178, V-25.477.497, V- CI 15.700.363, V- 18.199.623,

V- 25.669.526,
V- 28.102.157,
respectivamente.

04).- LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN
REUNIONES PUBLICAS

,
previsto y sancionado en el artículo
296 del Código Penal en relación con el articulo 297 ejusdem.

05).-TERRORISMO

previsto
y sancionado en los artículos 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

06).- FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO,

previsto y
sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo.

07).-

ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR,
previsto y sancionado en los artículos
37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
. ...".

El referido
procedimiento de
extradición activa
se inicia a solicitud
de los abogados Dinora Joselin
Bustamante Puerta, Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y
Jimmy Levy Avram, Fiscal Provisorio 83° Nacional contra la Legitimación de
Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Fiscal
Provisorio 67° Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal

Provisorio 38° Nacional Pleno del Ministerio Público y Fiscal Provisorio 93° Nacional Contra la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente, en virtud de la orden de aprehensión Nro. 037-18, dictada, en fecha 14 de agosto de 2018, por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Control con Competencia en casos Vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Caracas.

El 15 de agosto de 2018, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal del recibo del presente expediente, asignándosele el serial alfanumérico AA30-P-2018-000212

Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de

[...]

Extracto truncado. Texto completo (81,400 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

07 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 251 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 251 · Exp. E18-208
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Rayder Alexander Russo Márquez
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301286-251-16818-2018-E18-208.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Magistrada Ponente:
Doctora
FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El 15 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el oficio identificado con el núm. 083-18, de fecha 14 de agosto de 2018, proveniente del TRIBUNAL ESPECIAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, con el cual se remitió el expediente identificado con el alfanumérico 1C-S-006-18 (nomenclatura de dicho Tribunal) que contiene la SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA

del ciudadano

RAYDER ALEXANDER RUSSO MÁRQUEZ

, identificado con la cédula de identidad núm.

V-18.372.422

.

El

referido ciudadano es requerido por las autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de

TRAICIÓN A LA PATRIA

,

previsto

y sancionado en el artículo 128 del Código Penal;

HOMICIDIO INTENCIONAL

CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA

,

previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal "b" del Código Penal en relación con el artículo 80

eiusdem

;

HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y

POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,

previsto y sancionado

en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal

en relación con el artículo 80

eiusdem

, cometido en perjuicio de los ciudadanos

CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE.

MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB.

HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY

;

LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS

,

previsto

y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo

297

eiusdem

;

TERRORISMO

, previsto y sancionado en el artículo 52,

FINANCIAMIENTO

AL TERRORISMO

,

previsto y sancionado en el artículo 53 y
ASOCIACIÓN

,

previsto y sancionado en el artículo 37,
todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo; según procedimiento de extradición activa iniciado a solicitud de
la abogada Dinora Joselyn Bustamente Puerta y los abogados Farik Karin Mora
Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, actuando en su
carácter de Fiscal Provisorio 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales,
Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 67
Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 38
Nacional Pleno del Ministerio Público y Fiscal Provisorio 93 Nacional contra la
Corrupción del Ministerio Público, respectivamente.

El 15 de agosto de
2018, se dio cuenta en Sala de la referida solicitud a los Magistrados y
Magistradas que integran la Sala de Casación Penal; y
en esa misma fecha
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial
núm. 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010 (en adelante, "Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia"),
según
el cual,
"[e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal
Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva,
designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles
siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al
asunto...",
se asignó la
ponencia
a la Magistrada Doctora
FRANCIA
COELLO GONZÁLEZ
, quien
con
tal carácter suscribe la presente decisión.

Una v

[...]

Extracto truncado. Texto completo (105,980 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

08 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 252 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 252 · Exp. E18-213

- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Carlos Luis Monasterios Aular
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301287-252-16818-2018-E18-213.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Magistrada Ponente:
 Doctora
 FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El 15 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el oficio identificado con el alfanumérico núm. 083-18, de fecha 14 de agosto de 2018, proveniente del TRIBUNAL ESPECIAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, con el cual se remitió el expediente identificado con el alfanumérico 1C-S-006-18 (nomenclatura de dicho Tribunal) que contiene la SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado con la cédula de identidad núm. V-21.464.061

El referido ciudadano es requerido por las autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA,

previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal "b" del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN

,
previsto y sancionado
en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal
en relación con el artículo 80
eiusdem

, cometido en perjuicio de los
ciudadanos

CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE.

MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB.

HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY

;
LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS

,
previsto
y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297
eiusdem

;
TERRORISMO
, previsto y sancionado en el artículo 52,
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

,
previsto y sancionado en el artículo 53 y
ASOCIACIÓN

,
previsto y sancionado en el artículo 37,
todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, según procedimiento de extradición activa iniciado a solicitud de
la abogada Dinora Joselyn Bustamente Puerta y los abogados Farik Karin Mora
Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, actuando en su
carácter de Fiscal Provisorio 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales,
Delitos Financieros y Económicos, Fiscal Provisorio 67 Nacional contra la
Corrupción del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 38 Nacional Pleno y Fiscal
Provisorio 93 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público,
respectivamente.

El 15 de agosto de
2018, se dio cuenta en Sala de la referida solicitud a los Magistrados y
Magistradas que integran la Sala de Casación Penal; y
en esa misma fecha
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial
núm. 39.522 de fecha 1º de octubre de 2010 (en adelante, "Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia"),
según
el cual,
"[e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal
Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva,
designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles
siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al

asunto...",
se asignó la
ponencia
a la Magistrada Doctora
FRANCIA
COELLO GONZÁLEZ
, quien
con
tal carácter suscribe la presente decisión.

Una vez
examinado el expediente, este Má

[...]

Extracto truncado. Texto completo (106,990 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

09 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 253 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 253 · Exp. E18-209
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** Juan Luis Ibarra Verenzuela
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Yilber Alberto Escalona Torrealba
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301288-253-16818-2018-E18-209.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Ponencia del
Magistrado Doctor
JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 15 de agosto
de 2018, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente
signado con el alfanumérico 01°CT-S-006-18, procedente del Juzgado Especial Primero
de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos
Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel
Nacional, contentivo del procedimiento de
EXTRADICIÓN ACTIVA
del
ciudadano
YILBER ALBERTO ESCALONA TORREALBA
, titular de la cédula de
identidad N° V- 18.654.917, iniciado por el referido Tribunal con ocasión a la
orden de aprehensión dictada en su contra por la presunta comisión de los
delitos de
traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado

de frustración en la persona del Presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración; lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas; terrorismo; financiamiento al terrorismo; y, asociación, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 128; 405, concatenado con el 406, numeral 3, literal "b", en relación con el 80; 405, concatenado con el 406, numeral 2, en relación con el 80, y 296, en relación con el 297, todos del Código Penal, y artículos 52, 53 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la oportunidad señalada precedentemente, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y siendo la oportunidad legal pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano Yilber Alberto Escalona Torrealba y, a tal efecto, observa:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta en las actas que conforman el presente expediente, que el 5 de agosto de 2018, los abogados Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, Fiscales

Provisorios

Sexagésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en materia contra la Corrupción; Trigésimo Octavo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena; y Nonagésimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en materia contra la Corrupción, respectivamente, solicitaron al Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, se decretara orden de aprehensión, entre otros, contra el ciudadano Yilber

Alberto Escalona Torrealba,
por la presunta comisión de los delitos de: traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración; lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas; terrorismo; financiamiento al terrorismo; y, asociación, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 128; 405, concatenado con el 406, numeral 3, literal "b", en relación con el 80; 405, concatenado con el 406, numeral 2, en relación con el 80, y 296, en relación con el 297, todos del Código Penal, y artículos 52, 53 y 3

[...]

Extracto truncado. Texto completo (92,546 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

10 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 254 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 254 · Exp. E18-205
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Osman Alexis Delgado Tabosky (caso central)
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301289-254-16818-2018-E18-205.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

MAGISTRADA
PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

En
fecha 14 de agosto de 2018, la abogada Carol Padilla Juez del
Tribunal Especial
Primero De Primera Instancia En Funciones De Control Con Competencia En Casos
Vinculados Con Delitos Asociados Al Terrorismo Con Jurisdicción a Nivel
Nacional,

remitió a esta
Sala de Casación Penal, mediante oficio número 083-18, asunto distinguido con
el alfanumérico 01°C-T-S-006-18

(nomenclatura de ese tribunal),
contentivo de la solicitud de
EXTRADICIÓN ACTIVA
del ciudadano
OSMAN ALEXIS DELGADO TABOSKY,

venezolano,
mayor de edad e identificado con la cédula de identidad número
13.988.807,
requerido por su presunta participación en los delitos tipificados como
TRAICIÓN A LA PATRIA,
previsto y sancionado en el artículo
128 del Código Penal,
HOMICIDIO
INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA,
previsto
y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 3
literal "a" del Código Penal en relación con el artículo 80
eiusdem

,
HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO
EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN,
previsto y sancionado en el artículo
405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal en relación con
el artículo 80
eiusdem

, cometido en perjuicio de los ciudadanos
CAP JOSE DEL VALLE NUÑEZ MARTINEZ,
PTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ
DORANTE JESUS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA,
GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY,
titulares
de la Cedula de Identidad

Nº
V- 18.298.359, V-18153178, V-25.477.497, V- CI 15.700.363, V- 18.199.623, V-
25.669.526, V- 28102157,
respectivamente,

LANZAMIENTO DE
ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PUBLICAS,
previsto y sancionado en el artículo
296 del Código Penal en relación con el artículo 297 ejusdem,
TERRORISMO, FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
previstos y sancionados en los artículos 52, 53 y 37 respectivamente, de la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En
fecha 15 de agosto de 2018, se dio cuenta en Sala a los Magistrados que
integran la Sala de Casación Penal, y previa distribución,
correspondió el conocimiento de la misma a la Magistrada
YANINA BEATRIZ
KARABIN DE DÍAZ
; quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

ANTECEDENTES

En fecha 5 de
agosto de 2018, los abogados

Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera, y

Jimmy Levy Avram,

actuando como, Fiscal Provisorio 67°

Nacional Contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 38°

Nacional Pleno del Ministerio Público y Fiscal Provisorio 93° Nacional Contra la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente

,

mediante escrito interpuesto ante el

Tribunal Especial Primero De Primera Instancia En Funciones

De Control Con Competencia En Casos Vinculados Con Delitos Asociados Al

Terrorismo Con Jurisdicción A Nivel Nacional

solicitaron orden de aprehensión contra el

ciudadano

OSMAN ALEXIS

DELGADO TABOSKY.

En

esa misma fecha 5 de agosto, el prenombrado tribunal, vista la solicitud

incoada por los representantes del Ministerio Público, decretó orden de

aprehensión del ciudadano requerido.

Asimismo,

la orden de aprehensión fue librada bajo el número 011-18, en los siguientes

términos:

"...SE HACE

SABER: Al ciudadano DIRECTOR GENERAL DE CONTRA INTELIGENCIA MILITAR (DEIPC), que éste Tribunal por auto de esta misma fecha ordenó

[...]

Extracto truncado. Texto completo (187,841 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

11 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 255 · 16/08/2018

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 255 · Exp. E18-210
- **Fecha:** 16/08/2018
- **Magistrado(a) Ponente:** varios
- **Objeto:** Extradición activa al Perú — Jossier Eduardo López Valero
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gov.ve/decisiones/scp/agosto/301290-255-16818-2018-E18-210.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

MAGISTRADA
PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

En
fecha 14 de agosto de 2018, la abogada Carol Padilla Juez del
Tribunal Especial
Primero De Primera Instancia En Funciones De Control Con Competencia En Casos
Vinculados Con Delitos Asociados Al Terrorismo Con Jurisdicción a Nivel
Nacional,

remitió a esta
Sala de Casación Penal, mediante oficio número 083-18, asunto distinguido con
el alfanumérico 01°C-T-S-006-18

(nomenclatura de ese tribunal),
contentivo de la solicitud de
EXTRADICIÓN ACTIVA
del ciudadano
JOSSEER EDUARDO LOPEZ VALERO,
venezolano, mayor
de edad y titular de la cédula de identidad
V-16.199.310

,
,
requerido por su presunta participación en los delitos tipificados como
TRAICIÓN A LA PATRIA,
previsto y sancionado en el artículo
128 del Código Penal,
HOMICIDIO
INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA,
previsto
y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 3
literal "a" del Código Penal en relación con el artículo 80 ejusdem,
HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO
EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN,
previsto y sancionado en el artículo
405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal en relación con
el artículo 80 ejusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos
CAP JOSE DEL VALLE NUÑEZ MARTINEZ,
PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ
DORANTE JESUS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA,
GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY,
titulares
de la Cedula de Identidad
N°
V- 18.298.359, V-18153178, V-25.477.497, V- CI 15.700.363, V- 18.199.623, V-
25.669.526, V- 28102157,
respectivamente,
LANZAMIENTO DE
ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PUBLICAS,
previsto y sancionado en el artículo

296 del Código Penal en relación con el artículo 297 ejusdem,
TERRORISMO, FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO y ASOCIACIÓN,
previstos
y sancionados en los artículos 52, 53 y 37 respectivamente, de la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En
fecha 15 de agosto de 2018, se dio cuenta en Sala a los Magistrados que
integran la Sala de Casación Penal, y previa distribución,
correspondió el conocimiento de la misma a la Magistrada
YANINA BEATRIZ
KARABIN DE DÍAZ
; quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

ANTECEDENTES

Mediante
escrito presentado en fecha 14 de agosto de 2018, por los abogados
Farik Karin Mora
Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera, Jimmy Levy Avram, Dinora Bustamante y
Yeisza Hernández,
actuando
como, "
...Fiscal Provisorio 67° Nacional Pleno, Provisorio 38° Nacional Pleno
Nacional, Provisorio 93° Nacional Contra la Corrupción y Provisorio 83°
Nacional y Auxiliar contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y
Económicos
...", respectivamente
,
por ante el
Tribunal Especial Primero De Primera Instancia en Funciones de Control con
Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con
Jurisdicción a Nivel Nacional,
solicitaron
orden de aprehensión contra el ciudadano
JOSSER
EDUARDO LÓPEZ VALERO.

En esa misma
fecha – 14 de agosto de 2018 –, el prenombrado tribunal, vista la solicitud
incoada por los representantes del Ministerio Público, decretó orden de
aprehensión del ciudadano requerido.

Asimismo,
la orden de aprehensión fue librada bajo el número 035-18, en los siguientes
términos:

"...ORDEN DE APREHENSIÓN
Nº035-18

SE HACE SABER: Al
ciudadano DIRECTOR DEL SERVICIO BOLÍ

[...]

Extracto truncado. Texto completo (186,127 caracteres) en la URL canónica del TSJ.

12 · TSJ Sala de Casación Penal · Sent. 682 · 05/12/2024

- **Tribunal:** Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal
- **Sentencia / Expediente:** N° 682 · Exp. C24-445 (AA30-P-2024-000445)
- **Fecha:** 05/12/2024
- **Magistrado(a) Ponente:** Elsa Janeth Gómez Moreno
- **Objeto:** CASACIÓN — Desestima manifiestamente infundados los 9 recursos. Documento clave actual.
- **URL canónica:** <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/340119-682-61224-2024-C24-445.HTML>

Extracto del cuerpo de la decisión

Magistrada
Ponente Doctora
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En fecha 23 de agosto de 2024, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada al expediente contentivo de los recursos de casación interpuestos, el

primero

de ellos, por los abogados Eliécer Peña Granda y Yalira Granda, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.130 y 14.920, respectivamente, defensores del acusado ALEJANDRO

PÉREZ GÁMEZ

, titular de la cédula de identidad N° V-7.264.281;

el

segundo

por la abogada Zoraida Castillo de Cárdenas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 13.879, defensora del acusado

HÉCTOR ARMANDO HERNÁNDEZ DA COSTA

, titular de la cédula de identidad N° V-8.846.983;

el tercero

por la abogada Gracimar Del Valle Fierro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 58.867, defensora del acusado

JUAN CARLOS MONASTERIOS VANEGAS,

titular

de la cédula de identidad N° V-12.146.772;

el cuarto

por la prenombrada
abogada Zoraida Castillo de Cárdenas, defensora del acusado
PEDRO JAVIER
ZAMBRANO HERNÁNDEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-11.024.462;
el
quinto
, por el abogado Joel Antonio García Hernández, inscrito en
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 84.674, defensor del acusado
JUAN CARLOS REQUESENS MARTÍNEZ,
titular de la cédula de identidad N°
V-18.757.028;
el sexto
, por el referido abogado Joel Antonio
García Hernández, defensor del acusado
JOSÉ ELOY RIVAS DÍAZ
titular de
la cédula de identidad N° V-4.815.404;
el séptimo
, por el abogado
Juan Luis González Taguaruco, inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el Nro. 45.027, defensa de la acusada
ÁNGELA LIZBETH
EXPÓSITO CARRILLO
, titular de la cédula de identidad N° V-6.463.462;
el
octavo
, por el referido abogado Juan Luis González Taguaruco, defensa
del acusado
OSWALDO GABRIEL CASTILLO LUNAR
, titular de la cédula de
identidad N° V-23.860.075; y,
el noveno
, por la abogada Stefania
Migliorini Camposano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el Nro.262.683, defensa de los acusados
EMIRLENDRIS CAROLINA
BENITEZ
Y
YOLMER JOSÉ ESCALONA TORREALBA,
titulares de las cédulas
de identidad Nros. V-16.278.761 y V-18.103.533, respectivamente, en el proceso
seguido en contra de los referidos acusados, al igual que contra los ciudadanos:
ARGENIS GABRIEL VALERO RUIZ
, titular de la cédula de identidad N° V-23.447.512,
JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZÁLEZ
, titular de la cédula de identidad N° V-25.030.814,
ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUE,
titular de la cédula de identidad N° V-21.078.752,
BRAYAN DE JESÚS OROPEZA RUIZ,
titular de la cédula de identidad N° V-27.220.746,
HENRYBERTH ENMANUEL RIVAS VIVAS

, titular de la cédula de identidad N° V-24.939.468,
YANIN FABIANA PERNÍA CORONEL

, titular de la cédula de identidad N° V-24.194.508

y

WILDER ANDERSON VÁSQUEZ VELÁSQUEZ

, titular de la cédula de identidad

N° V-28.302.016, en contra de la decisión de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a Nivel Nacional, que declaró

SIN LUGAR

los

recursos de apelación interpuestos en contra de la decisión dictada en fecha 2 de agosto de 2022, y publicada el 17 de febrero de 2023, por el

Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de

Juicio con competencia

en casos

[...]

Extracto truncado. Texto completo (421,168 caracteres) en la URL canónica del TSJ.